Capítulo 3

# Huaycán combativo: la resistencia urbana a la insurgencia senderista

Lucía Luna-Victoria Indacochea

## Introducción

Localizado en el kilómetro 17 de la carretera Central, Lima, el Proyecto Especial de Habilitación Urbana del Área de Huaycán (PEH), mejor conocido solo como Huaycán, se creó durante un momento fugaz de la historia contemporánea. El proyecto, emanado de la demanda popular por una vivienda digna y propia, se concretó con la llegada a la municipalidad de Lima Metropolitana de la Izquierda Unida (IU), un frente de partidos leninista, trotskista y maoísta. El PEH significó la creación de un proyecto socialista con el propósito de beneficiar a los sectores de bajos recursos en las periferias de Lima, aquellos sin propiedad ni acceso a crédito, al igual que se propuso ser un programa de vivienda ordenado.[1]

Alfonso Barrantes Lingán, el primer alcalde de izquierda de Lima Metropolitana (1983-1985), se reunió con los pobladores de los asentamientos humanos, predominantemente de los distritos de Ate-Vitarte y El Agustino, y con el arquitecto

1. La creación de Huaycán ha sido examinada en detalle en otras ocasiones; véase Gyger 2019, Luna-Victoria Indacochea 2022 y Smith 1992.

Eduardo Figari Gold, miembro de Vanguardia Revolucionaria,[2] para ejecutar las demandas de los sectores más pobres. Figari fue asignado como representante municipal en el PEH, y fue él quien propuso un diseño que respondía a la crisis de vivienda y pobreza en la ciudad. La respuesta consistió en una comunidad urbana planificada, en donde los pobladores trabajarían de la mano de urbanistas y técnicos municipales para crear un modelo de desarrollo ordenado y progresivo. El proyecto se decretó el 3 de mayo de 1984 y la ocupación del terreno se hizo el 15 de julio del mismo año.

El conflicto armado interno que vivía el país desde 1980 estaba concentrado hasta ese momento en el centro sur andino. En Lima, el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso buscaba posicionarse infiltrando los sindicatos donde la izquierda tenía una presencia predominante. Durante la planificación y ocupación de Huaycán, en 1984, Sendero no estuvo presente; los conflictos más visibles eran entre los militantes de IU. Por ejemplo, Patria Roja, integrante maoísta de la IU, lideró invasiones a través de la asociación de vivienda Horacio Zevallos, con el propósito de ganar simpatizantes, sin considerar los requisitos del proyecto. Consecuentemente, los intentos de invasión resultaron en una serie de batallas campales, donde los pobladores buscaban mantener el control y la planificación de Huaycán propuesta por los técnicos municipales y dirigentes de asociaciones, principalmente de Vanguardia Revolucionaria. Recién al cumplirse un año de la ocupación, aparecieron los senderistas, quienes amenazaron a los arquitectos de la IU y atacaron al proyecto municipal llamándolo "revisionista."

Este capítulo examina la construcción de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán (CUAH) durante los años del

2. Vanguardia Revolucionaria, partido marxista creado en 1965, fue uno de los fundadores de la IU en 1980.

conflicto armado interno y traza las batallas de sus dirigentes por la autogestión comunal y resistencia urbana contra la violencia política de Sendero Luminoso y del Estado peruano. La resistencia urbana en Huaycán se caracterizó por la lucha política contra Sendero y la legitimación de las propuestas de desarrollo urbano progresivo. Fue una resistencia basada en la lucha colectiva de los pobladores para lograr el desarrollo urbano en el asentamiento, una lucha que se desplegó a través de la alianza entre los pobladores y la IU, y después entre los pobladores, las ONG, la Iglesia católica y el Estado. No fue, en un principio, una resistencia militar. Solo al enfrentarse a la presencia de las Fuerzas Armadas y ante el riesgo de perder la autonomía del asentamiento, los dirigentes fueron forzados a negociar la creación de grupos armados y de inteligencia dentro de Huaycán. Los protagonistas de esta historia son los dirigentes combativos de la CUAH.

La batalla por la defensa y construcción de la comunidad urbana de Huaycán tuvo dos grandes etapas. La primera (1985-1990) abarca el periodo en el que Huaycán se convirtió en un campo de batalla entre el gobierno aprista, IU, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y Sendero Luminoso. La lucha por su desarrollo fue clave para ganar el apoyo de la comunidad de parte de los partidos e insurgentes; sin embargo, las propuestas de cómo obtenerlo divergían; entre ellas el desarrollo progresivo de la IU, la colaboración con el Estado aprista y la lucha armada. Dentro de esta batalla política destacaron las acciones de los dirigentes de Huaycán para definir el carácter de su comunidad más allá de los partidos políticos. Estas acciones incluyeron las batallas dentro de asambleas populares, las marchas por servicios básicos y la creación de la CUAH.

La segunda etapa (1990-1996) corresponde a un momento en que los dirigentes deciden enfrentarse abiertamente a Sendero, convertido en una amenaza para la estructura comunal. Este giro empieza con la elección de Pascuala Rosado Cornejo como

secretaria general de Huaycán en 1991 y el enfrentamiento político de su junta directiva contra Sendero. Los dirigentes de Huaycán se propusieron combatir a Sendero a través de obras públicas en la comunidad. Sin embargo, la victoria electoral de Alberto Fujimori y la estrategia de contrainsurgencia urbana cambió el rumbo de la resistencia civil en Huaycán. El régimen cooptó a los comités de autodefensa existentes y creó rondas urbanas contra Sendero en 1992. Esta intervención del Estado transformó las dinámicas de aceptación, tolerancia y resistencia civil. De esta forma, la colaboración con el Estado convirtió a los dirigentes y ronderos en los blancos principales de asesinatos selectivos de los senderistas, una estrategia de odio que permaneció años después de la captura de Abimael Guzmán en 1992.

En mis entrevistas, los dirigentes de Huaycán comparten una narrativa de una lucha colectiva para preservar la participación y agencia de los pobladores en contra de aquellos que buscaban eliminarlos. Ellos recuerdan haber confrontado el caos anárquico de las izquierdas y el clientelismo del APRA durante la segunda mitad de los ochenta. Los testimonios evidencian que la presencia de Sendero en Huaycán fue inicialmente externa y luego política. No obstante, la evidencia de lo que realmente fue Sendero en Huaycán es parcial y limitada a su mención en testimonios, archivos policiales y periódicos. En los primeros años, Sendero irrumpía en las asambleas con destacamentos armados y propaganda, y consiguió formar parte del esquema político de la comunidad. En los años noventa, Sendero logró expandirse dentro de las zonas de Huaycán, llegando a tener control en las partes altas del asentamiento.

Mientras la narrativa de los dirigentes enfatiza que Sendero nunca controló la directiva central de Huaycán, sí alude a cierto control, mayormente en zonas que se crearon después de la planificación inicial del asentamiento. Esta narrativa no permite saber a cabalidad si hubo dirigentes en la directiva central que simpatizaron con Sendero; sin embargo, un dirigente central fue

arrestado por sus vínculos con el MRTA. Igualmente, mientras la mayoría de los dirigentes mencionaron haber formado parte de Vanguardia Revolucionaria, hubo algunos miembros de otros partidos, como 14 de Junio, creado a principios de los años ochenta, que tuvo vínculos con Sendero. Sin embargo, fueron las acciones de dirigentes de Huaycán durante estos años las que finalmente superaron el plan de los senderistas de crear un comité popular abierto en Huaycán, una victoria que los forzó a fundar un asentamiento alternativo, Raucana, en 1990. Este capítulo ilustra la resistencia del pueblo de Huaycán en defensa de la autogestión, el orden interno y el desarrollo progresivo en el contexto de la insurgencia senderista y la contrainsurgencia estatal.

## Las políticas combativas en Huaycán, 1985-1990

Desde su creación, Huaycán se consolidó como un espacio político heterogéneo. Los partidos políticos y movimientos insurgentes buscaban crear alianzas con los pobladores, proponiendo solucionar las necesidades más urgentes a cambio de su apoyo electoral o como combatientes. En este contexto, Huaycán logró ser una cuna de ideologías de izquierda guiadas por una visión de crear un espacio urbano capaz de brindar una mejor calidad de vida, así como promover la participación colectiva de sus pobladores. En 1985, el censo de Huaycán, realizado por el municipio y las ONG Ideas y Cidap, señaló que, al cumplirse un año de la creación del proyecto, casi el 90% de beneficiarios habían sido familias de bajos recursos provenientes de los asentamientos de Lima Este, de los cuales el 60% había nacido en Lima (Figari Gold 1987: 106). La población estaba conformada por 17.264 individuos y 4316 unidades familiares. Los pobladores fueron relativamente jóvenes: 84,3% tenían menos de 35 años y 49% menos de 18 (Figari Gold 1987: 106). En cuanto a su ocupación, 31,69% eran obreros, 22,72% empleados y 31,81%

trabajadores independientes. Cerca del 60% de los pobladores laboraba a lo largo de la carretera Central, y solo 7,46%, unas 1287 personas, trabajaba en Huaycán (Figari Gold 1987: 106). La población de Huaycán bordeaba los 50.000 habitantes en 1989,[3] un reflejo de lo que pasaba en Lima Metropolitana, que creció de 4.608.010 habitantes en 1984 a 6.345.856 en 1993.[4]

Al asumir el poder en 1985, el gobierno de Alan García buscó solucionar las desigualdades económicas y sociales que promovían el apoyo a grupos insurgentes. El partido aprista creo una agenda para combatir la deuda externa, la inflación y la insurgencia. A diferencia de su antecesor, García reconoció las raíces históricas de la insurgencia de Sendero, incluido el abandono estatal del campesinado y el encarcelamiento injusto de izquierdistas y opositores políticos. El gobierno buscó incorporar a los sectores urbanos pobres a la economía formal y la fuerza laboral, así como reducir las restricciones al acceso al capital y crédito (Graham 1991: 97). El programa principal fue el Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT).[5] Para los pobladores de Huaycán, el enfoque de los apristas en relación con los sectores urbanos pobres prometió remediar el empeoramiento de las condiciones económicas y la calidad de vida. El primer secretario general en Huaycán, elegido en elecciones universales, fue el aprista Raúl Rodríguez. A través del PAIT, el APRA logró reclutar con éxito a nuevos miembros del partido,

---

3. "El ensayo de Raucana". Carlos Iván Degregori, *Quehacer*, n.º 73: 30 (Lima: septiembre-marzo 1991).

4. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Censo de 1993. Disponible en: <https://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/>.

5. El PAIT se propuso brindar trabajo comunitario a los sectores más pobres, particularmente mujeres. Muchas veces los trabajadores del PAIT tenían que afiliarse al APRA para participar o renunciar a su participación en comedores populares creados por la IU.

determinar su lealtad a la organización y al presidente e imponer una identidad partidaria sobre una identidad comunitaria.

Tras la victoria del APRA, Sendero Luminoso buscó deslegitimar a los apristas y reforzar el impulso de su guerra popular en la ciudad. En 1986, Abimael Guzmán "definió que la tarea fundamental del Partido era 'desenmascarar' al APRA, quitarle la careta progresista" y finalmente "inducir[los] al genocidio" (CVR 2003, II: 61). La estrategia de Guzmán respondía a las crecientes derrotas de Sendero en Ayacucho, donde la contrainsurgencia había logrado el apoyo de las rondas campesinas. A pesar de la pérdida de impulso en el centro sur andino, o por eso mismo, Sendero priorizó el desarrollo de su guerra popular en los asentamientos humanos de Lima, desplegando un intenso trabajo de proselitismo entre los pobladores de asentamientos humanos (CVR 2003, II: 65).

De 1980 a 1983, Sendero percibió la capital como una caja de resonancia donde cualquier acción alcanzaba la atención nacional e internacional y, como consecuencia, magnificaba su insurrección. Sendero creó una estrategia basada en una serie de Grandes Planes Militares, que implicó mantener una presencia clandestina por el tiempo suficiente para que el movimiento maoísta controlara las principales entradas a la capital, incluida la carretera Central, proveedora clave de alimentos para la ciudad.[6] El objetivo era "asfixiar la ciudad" y, en última instancia, aislar el centro de poder, lo que aceleró el trabajo de inteligencia existente y transformó a la capital en un campo de batalla. El tercer Gran Plan (mayo 1983-septiembre 1986) buscaba extender su mensaje en los asentamientos humanos y las fábricas

6. Planes militares: Inicio (mayo-diciembre 1980), El Despliegue de la Guerra de Guerrillas (enero 1981-enero 1983), La Conquista de Bases de Apoyo (mayo 1983-septiembre 1986), El Desarrollo de Bases de Apoyo (marzo 1987-septiembre 1988) y Desarrollo de Bases de Apoyo a partir de la Conquista del Poder (agosto 1989-agosto 1992).

de la periferia de Lima. Para lograr este objetivo, el partido desarrolló el "Gran Salto", que iniciaría en junio de 1984. Este salto consistió en la militarización de sus contingentes urbanos y cinco estrategias guerrilleras: sabotaje, asesinatos selectivos, agitación, propaganda y paros armados. Los contingentes urbanos de Sendero, el Comité Metropolitano y Socorro Popular ejecutaron el nuevo plan.

El Comité Metropolitano fue compuesto por "la célula de dirección y tres zonales: Este, Oeste y Centro" (CVR 2003, II: 59). Dentro del Comité Metropolitano, el salto significó "una nueva etapa de captación de masas en los asentamientos humanos, urbanizaciones populares, tugurios y fábricas"; por ejemplo, las empleadas de hogar fueron un grupo crucial, ya que "podían ser buenas informantes" (CVR 2003, II: 60). La zonal Este funcionó en los distritos de Ate-Vitarte, El Agustino y San Juan de Lurigancho. En Huaycán, Sendero desarrolló una red de simpatizantes en una subzona de la zonal Este, incluidos los compañeros "Teófila", "Carlos" y un médico que vivía a dos cuadras de la calle principal de Huaycán.[7]

El segundo contingente, Socorro Popular, operó como una extensión clandestina de la Asociación de Abogados Demócratas y el Comité de Presos Políticos y sus Familiares.[8] Socorro Popular también creó contingentes en las zonales de Lima. La zonal Este, que incluyó las fábricas de la carretera Central y Huaycán, fue considerada el "eje más importante para sus acciones terroristas".[9] Socorro Popular amplió su base a través de

7. Dircote, PNP, atestado 78: 74-80, tomo 18 (1998).

8. De 1981 a 1985, Socorro Popular "cumplió tareas de asistencia médica, asesoría legal y en ocasiones difundió denuncias y agitación verbal o escrita a favor de los detenidos de Sendero Luminoso" (Jiménez Bacca 2000: 543).

9. Socorro Popular fue encabezado por la abogada Yobanka Pardave Trujillo, conocida clandestinamente como "Olga" o "Sarah." Pardave entró en la clan-

sus redes de militantes encarcelados y familiares. Este método de reclutamiento es evidente en los expedientes judiciales del presunto terrorista Leoncio C. T., un menor de 16 años, y los de sus hermanos.[10] Al ser interrogados por la policía en diferentes momentos, Leoncio y su hermano Bartolomé confesaron que su reclutamiento empezó con las visitas a su hermana Lucila en el penal de Santa Mónica.[11] Los hermanos asistieron a las escuelas populares dentro del penal y luego se les dio un enlace en el exterior. En el caso de Leoncio, la compañera "Julia" le encargó varias acciones, entre ellas la entrega de explosivos a contactos en Huaycán. En julio de 1985, la policía lo detuvo y torturó junto a varios otros presuntos terroristas. Bartolomé, sin embargo, se integró al contingente zonal Este del Comité Metropolitano, donde realizó propaganda y acciones armadas entre 1985 y 1989.[12] A pesar de las detenciones, Socorro Popular creció de manera explosiva fuera del alcance de las autoridades (Jiménez Bacca 2000: 546).

La vida cotidiana de los pobladores en Huaycán fue impactada por la escala de acciones senderistas en la ciudad. El servicio de inteligencia del Estado atribuyó este aumento al "desarrollo de las Comisiones Locales" del Comité Metropolitano.[13] Una de las primeras acciones senderistas en Huaycán fue el secuestro de buses de la compañía Enatru, un medio de transporte fundamental

---

destinidad y se volvió fundamental en la militarización de Socorro Popular a partir de 1986 y la creación del Movimiento Revolucionario en Defensa del Pueblo (MRDP), consolidado en 1987 (Jiménez Bacca 2000: 556).

10. Dircote, PNP, atestado 45 (1985). Expedientes judiciales de varios juicios a presuntos terroristas. Colección Gustavo Gorriti, caja 6. Princeton, Universidad de Princeton.

11. Dircote, PNP, atestado 78: 74-80, tomo 18 (1998).

12. Ibíd.

13. "Nota de Inteligencia n.° 65", Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Presidencia de la República. Lima, 7 de octubre (1986). Colección Gustavo Gorriti, caja 9. Princeton, Universidad de Princeton.

para los pobladores, y la difusión de panfletos propagandísticos titulados "El desarrollo de la Guerra de Guerrillas" en la calle principal de Huaycán.[14] El 25 de julio de 1986, ocurrió el primer asesinato selectivo de un líder político en Huaycán por parte de Sendero.[15] La Dircote atribuyó el asesinato de Andrés Tapia Murillo a un escuadrón de aniquilamiento, y se esclareció que fue parte de una ola de asesinatos selectivos contra líderes apristas en respuesta a las masacres en los penales en junio de 1986.

Tapia empezó a militar en el partido aprista antes de mudarse a Huaycán, y su trabajo como dirigente local del PAIT le brindó reconocimiento en el asentamiento. Antes de asesinarlo, Sendero lo amenazó con mensajes en busca de venganza por las masacres, e incluso en una ocasión prendieron fuego a su casa. La muerte de Tapia dejó a María Martínez de Tapia, militante aprista y trabajadora del Club de Madres de Huaycán, viuda y con ocho hijos. Martínez pidió en vano protección de la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones, y declaró a los medios que "esta zona es muy peligrosa e infestada de subversivos. Por eso es que pedimos protección para nosotros los dirigentes apristas".[16] Sendero justificó el asesinato de líderes locales como justicia popular contra la corrupción. En Huaycán se sabía que ciertos dirigentes varones del PAIT manipulaban a las trabajadoras del programa y las obligaban a brindar favores sexuales.[17] Fue este comportamiento y la falta de respuestas a los reclamos lo que alimentó el descontento con la dirección local del APRA y creo simpatías con la retórica de justicia popular de Sendero.

---

14. Dircote, PNP, atestado 78: 74-80, tomo 18 (1998).
15. "Terror en el arenal". Policial, pp. 16-17. *La República*. Lima, 27 de julio de 1986.
16. Ibíd., p. 17.
17. Pedro Arévalo. Entrevista con la autora. Zoom, 4 de febrero de 2021.

Como respuesta al asesinato de Tapia y a las acusaciones contra el secretario general Rodríguez por conducta indecente, los pobladores organizaron el Segundo Congreso de Pobladores de Huaycán en agosto de 1986. Para el dirigente y fiscal local Pedro Arévalo, miembro de Vanguardia Revolucionaria, la dirección aprista en Huaycán trabajó activamente para socavar lo que había puesto en marcha la IU y el comité de gestión desde la creación del PEH. De hecho, fue Arévalo quien descubrió a Rodríguez en circunstancias comprometedoras que involucraban a una mujer. A raíz de estos sucesos, el Congreso de Huaycán convocó a los delegados de las UCV (Unidades Comunales de Vivienda) para escoger una nueva dirigencia luego de eliminar las elecciones universales acordadas anteriormente. Walter Ortega asumió el cargo de secretario general en 1986, y aseguró nuevamente el control de la IU en Huaycán. Sin embargo, la victoria de los apristas en las elecciones municipales fortaleció su control de la ciudad y comprometió el desarrollo de Huaycán, visto como un proyecto emblemático de sus rivales políticos.

Tras la llegada del aprista Jorge del Castillo a la alcaldía de Lima Metropolitana en 1987, Huaycán dejó de ser un proyecto especial del municipio. El dirigente David Porras, hijo de migrantes de Tarma y nacido en Santa Clara, uno de los centros poblados más antiguos de la carretera Central, fue testigo de la disolución del proyecto de vivienda: "Todos los equipos que tenía [el proyecto], por ejemplo, en la oficina técnica de Huaycán, empiezan a desaparecer [...]. Los recursos que estaban y los materiales, todo eso perdieron".[18] El equipo técnico que guío la planificación de los lotes, compuesto por los arquitectos Eduardo Figari Gold, Carlos Roel, Reynaldo Ledgard, Linda Zilbert y Silvia de los Ríos, también fue eliminado. Lo que estaba en juego para la sobrevivencia de la comunidad era resguardar la

18. David Porras. Entrevista con la autora. Lima, 20 de diciembre de 2019.

participación de los pobladores. En un pueblo sin electricidad ni agua potable, los pobladores dependían unos de otros para sobrevivir. La nueva directiva de IU buscó mantener el componente democrático en la comunidad, pero se enfrentó al antagonismo aprista, y el descontento generó la radicalización de algunos pobladores.

Al perder el favor del gobierno, Huaycán se convirtió en el foco de varias intervenciones de las fuerzas del orden. De 1986 a 1988, el gobierno aprista emitió veinte decretos de estado de emergencia en Lima, que justificaron la represión en los asentamientos humanos. Dos operaciones en 1986 y 1987 resultaron en el arresto de seiscientas personas, e ilustraron el interés de la policía y las Fuerzas Armadas de tratar a Huaycán como zona roja.[19] La operación del 18 de marzo de 1987 tuvo como objetivo capturar a las células terroristas responsables de un ataque a los militares, y los policías arrestaron a estudiantes, amas de casa, dirigentes populares, adolescentes borrachos y vagabundos (Desco 1989: 342). Otro factor que legitimó la represión fue el racismo en relación con los desplazados de la violencia que llegaron en gran número a Huaycán a partir de 1987.[20] La estigmatización de estas personas contribuyó a la denominación de Huaycán como zona roja. Cualquiera sin documentación fue arrestado, lo que agregó un elemento de terror a las nuevas medidas de la contrainsurgencia. El ambiente de inseguridad que envolvía a Lima evidenció la creciente presencia de Sendero en la capital.

---

19. "Ahora rastrillajes". *El Amauta*, p. 5. Lima, 4 de septiembre 1986.
20. La trayectoria de las personas desplazadas en Huaycán ha sido estudiada por el antropólogo Iván Ramírez Zapata (2017) y documentada por las fotógrafas Käthe Meentzen y Vera Lentz. Disponible en: <https://www.verdadyreconciliacionperu.com/fotos/fotosListado.aspx?O=Autor&A=LENTZ,%20Vera> (última consulta: 15/09/22).

La junta directiva de IU en Huaycán contrarrestó el sabotaje a la participación popular por parte del APRA y Sendero, y reforzó la autogestión comunitaria. Estos esfuerzos se formularon como respuesta colectiva a la crisis económica, una situación que no conocía límites partidarios y amenazaba la supervivencia de los pobladores en Huaycán. Una acción emblemática en la historia de Huaycán ocurrió el 26 de marzo de 1987, cuando dirigentes organizaron una marcha hacia el centro de la ciudad con la intención de hacer conocer los agravios que soportaba la comunidad al presidente. Los pobladores obtuvieron un permiso de la ciudad para congregarse y entrar a la plaza frente a Palacio de Gobierno. Los medios de comunicación elogiaron la marcha como una movilización pacífica, y no se reportó ninguna actividad subversiva. Más bien, la cantidad de personas en la marcha, miles según la cobertura en los medios, ilustró la capacidad organizativa de los dirigentes de Huaycán. Los pobladores lograron resolver una disputa con Sedapal (empresa de agua potable y alcantarillado): se atribuyó la victoria a la comunidad, y no a un solo partido.

El mismo año, los pobladores de Huaycán convocaron al Primer Congreso Estatutario. Dos bandos ideológicos predominaron en el cónclave: los que apoyaban una comunidad autogestionaria y los que preferían mantener la Asociación de Pobladores. La comunidad autogestionaria, semejante a la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador, fue impulsada por dirigentes de IU. Por otro lado, los que preferían mantener la asociación incluían al dirigente Jaime Lastra Domínguez, quien explicó: "Si entendemos la autogestión como una forma democrática, tomar decisiones, reclamar, tramitar, eso se puede dar. Pero los compañeros de Izquierda Unida planteaban que debía ser [...] un nuevo poder, un nuevo gobierno".[21]

---

21. Charles Jaime Lastra Domínguez. Entrevista con la autora. Lima, 18 de enero de 2020.

De 300 pobladores, 220 votaron a favor de la denominación Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán (CUAH).[22] En protesta, Sendero interrumpió el congreso con un contingente de veinte miembros armados para intimidar a la comunidad. El dirigente Pedro Sulca Chacón recordó que "[Sendero] quemó todos los papeles, los acuerdos que se habían aprobado en ese momento y nos obligó a gritar Viva la Guerra Popular".[23] La creación de la CUAH reiteró el deseo de autonomía de la comunidad frente al cambio de partidos políticos y la escalada de violencia del conflicto armado. Sulca concluyó que "nosotros lo hicimos [...] por una necesidad de derrotar política e ideológicamente a Sendero en Huaycán".[24] El voto a favor de la CUAH fue el primer desafío abierto a Sendero por parte de los dirigentes.

El 17 de febrero 1988, los pobladores de Huaycán marcharon nuevamente hacia Palacio de Gobierno con el fin de reclamar contra el abandono estatal y la ineficiencia de las autoridades. Para Sulca, militante de IU y organizador de la marcha, se trataba de ejercer sus derechos. La movilización derivó a las demandas de sobrevivencia: "El pueblo necesitaba agua, necesitaba electrificación, necesitaba movilidad, necesitaba abastecimiento".[25] Los dirigentes de Huaycán planearon la marcha a lo largo de varias semanas.

Sendero, a través de su periódico *El Diario*, apoyó la decisión de los líderes de Huaycán de marchar. La cobertura antes de llevarla a cabo reiteró que la liberación de los dirigentes detenidos fue la causa principal de la movilización, además de las necesidades básicas. Tres días antes de la marcha, *El Diario* citó

---

22. Pedro Sulca Chacón. Entrevista con la autora. Lima, 17 de diciembre de 2019.
23. Ibíd.
24. Ibíd.
25. Charles Jaime Lastra Domínguez. Entrevista con la autora. Lima, 7 de diciembre de 2019.

al secretario general de Huaycán, Walter Ortega, quien aseguró que la marcha serviría para denunciar la represión y los rastrillajes en Huaycán, y exigió la "libertad inmediata de los socios Máximo Ayala Sayar y Abraham Guisado, quienes han sido acusados de 'terroristas'".[26] El día de la marcha, *El Diario* destacó la demanda de las mujeres y citó a Edith Povis, madre de seis hijos y presidenta de la zona A: "No pedimos limosnas, sino la solución y el respeto a nuestros derechos, así como la satisfacción de nuestras necesidades básicas [...]; a nosotros, por reclamar agua, luz y escuelas, nos llaman terroristas".[27] La cobertura revela la cooptación de las demandas de Huaycán por parte de Sendero.

Los dirigentes de Huaycán discreparon sobre cómo planificar la marcha hasta Palacio de Gobierno, en el centro de la ciudad. Los pobladores, según Sulca, tenían justificación para solicitar un permiso para marchar, pero fue denegado. "Si suspendíamos la marcha [Sendero] acusaba de traición a la marcha [...] porque si nosotros hubiéramos suspendido, de repente hubiéramos perdido el liderazgo sobre la gente", explicó Sulca.[28] Sendero presionó a la población para que siguiera adelante con la marcha y envió una directiva a su contingente urbano para que participara en ella.[29] Los dirigentes se vieron obligados a proteger los intereses Huaycán, pero ahora se enfrentaban a un gobierno hostil y a un Sendero que buscaba cualquier oportunidad para cooptar la marcha. Los dirigentes zonales de Huaycán reunieron a los pobladores afuera del hospital Dos de Mayo y marcharon hacia la Plaza de Armas con el propósito de controlar

26. "Pobladores de Huaycán harán marcha de protesta", *El Diario*, p. 5. Lima, 14 de febrero de 1988.
27. "Huaycán se moviliza por agua, luz y transporte". *El Diario*, p. 14. Lima, 17 de febrero de 1988.
28. Pedro Sulca Chacón. Entrevista con la autora. Lima, 17 de diciembre de 2019.
29. Dircote, PNP, atestado 78: 74-80, tomo 18 (1998).

la protesta y establecer que se trataba de una demanda por servicios básicos. No obstante, durante la marcha Sendero detonó dos explosivos creando caos y comprometiendo a los pobladores con su lucha popular. Cientos fueron arrestados y heridos, mientras un poblador, Rafael Flores Echevarría, murió al ser atropellado por un rochabús.

La cobertura de los medios centristas y de derecha alimentó la percepción de Huaycán como un bastión terrorista. Los titulares después de la marcha, como "Huaycán rojo", de *Caretas*, justificaron la cautela de las autoridades en relación con Huaycán. "Sendero ganó políticamente porque para la prensa el tema de las reivindicaciones quedó en segundo plano [...] pusieron como que Sendero condujo esa marcha", recordó Sulca.[30] La presencia de Sendero en la marcha, lejos de ser un invento de los medios alarmistas, ilustró la amenaza que representaba para que los dirigentes mantuvieran el control de la comunidad.

Las concesiones obtenidas tras la marcha reiteraron el poder de la movilización popular. *El Peruano*, diario oficial del Estado, publicó el compromiso del presidente de cumplir con las demandas de Huaycán (CVR 2003, V: 430). En las áreas consolidadas de Huaycán, zonas A-G, se atendieron las exigencias de electrificación y agua, en su mayoría en la instancia burocrática. Los residentes seguían siendo responsables de financiar sus servicios, muchas veces apoyados por ONG y la Iglesia. A pesar de lograr las demandas, la represión a los pobladores por parte de la policía, el oportunismo de Sendero y el vilipendio de los medios disuadieron la movilización colectiva como herramienta del pueblo. Igualmente, Sendero intentó hacer de la muerte de Flores Echevarría un grito de guerra popular. Sin embargo, la mayoría de los pobladores de Huaycán la interpretaron como un

30. Pedro Sulca Chacón. Entrevista con la autora. Lima, 7 de enero de 2020.

sacrificio por el desarrollo de Huaycán y lo convirtieron en "el primer mártir de Huaycán".

La escala de acciones de Sendero en Huaycán se debió a la estrategia propuesta durante el "Primer Congreso del Partido Comunista del Perú" 1988-1989 y el despliegue del cuarto Gran Plan. Este consistió en el "desarrollo de bases de apoyo" que "[organizó] el trabajo de las masas" y fusionó las operaciones de las distintas ramas en Lima (Movimiento Revolucionario del Pueblo, Comité Metropolitano, Socorro Popular) (CVR 2003, II: 81). Sendero realizó 63.052 acciones en tres años, principalmente de propaganda ("desfiles de jóvenes militantes, fogatas en los cerros, volanteos en los mercados") en los asentamientos humanos (CVR 2003, II: 83). La proclamación de un "equilibrio estratégico" durante el Congreso confirmó una nueva fase militar basada en el exceso de confianza del partido y la invasión simbólica de la capital. La nueva estrategia presionó a las ramas locales para aumentar sus acciones a pesar de la reducción de los contingentes y las victorias de la contrainsurgencia en la sierra.[31]

En Huaycán, la presencia de Sendero, la represión del Estado y el *shock* económico de 1988 devastaron la calidad de vida de los pobladores y llevaron a la organización del Tercer Congreso del Pueblo en marzo 1988 (Butteler 1997: cap. 9). La IU, el APRA y los "radicales" se enfrentaron por la dirección central de Huaycán (Butteler 1997: cap. 9). El congreso concluyó en la elección de Juan Lara Casabona como secretario general, quien luego sería arrestado por sus vínculos con el MRTA, lo que

31. El MRTA continuó con sus acciones en toda la capital y amplió su presencia en la región de San Martín y la sierra central. En Huaycán, el MRTA se restringió a usarlo como "dormitorio", donde los militantes pasaban la noche y se reagrupaban luego de movilizarse dentro y fuera de la capital. Sin embargo, el MRTA llevó a cabo acciones notables, como el robó de cuatro buses de la empresa Enatru cerca de la entrada de Huaycán. Por lo tanto, la presencia del MRTA también aumentó la represión policial y militar en Huaycán (Desco 1989: 218).

agravó la presión sobre los dirigentes de IU para enfrentar tanto la represión militar como la infiltración de Sendero. Al perder a su secretario general, los dirigentes interinos, quienes tenían poca experiencia, fueron presionados por los maoístas para que organizaran una nueva marcha. Los dirigentes de IU lograron evitarla a través de un pleno, y quedó claro que nuevas elecciones serían necesarias para mantener el control de Huaycán (Arévalo 1997: 70). A finales de 1989, los dirigentes convocaron el "Cuarto Congreso del Pueblo" y aseguraron el retorno de la democracia directa en las elecciones de la dirección central. El resultado fue una victoria para el APRA (Arévalo 1997: 70). El triunfo aprista creó conflictos con los dirigentes de IU, que resultaron en confusión y una crisis de legitimidad para los dirigentes. El conflicto obligó a crear un Pleno Popular donde estos eligieron una dirección central provisional a cargo de Luis López Fernández (Arévalo 1997: 70).

Sendero aprovechó la crisis de liderazgo para cuestionar la legitimidad del modelo de autogestión, y en varias ocasiones afirmó el compromiso de Huaycán con su lucha armada.[32] Sendero calificó la creación de la CUAH como una tesis revisionista e impulsó acciones que desafiaron al comité central de Huaycán.[33] En junio de 1989, *El Diario* exaltó la decisión de la asamblea de la zona E de rechazar "el planteamiento de grupos revisionistas de IU que tratan de imponer la rechazada electrificación del A. H. mediante el sistema de autogestión".[34] La zona E de Huaycán se autodenominó como la "zona E combativa".[35] Los maoístas también aprovechaban el caos para realizar acciones

32. "Se abre una nueva etapa en el movimiento barrial". *El Diario*, pp. 8-9. Lima, 24 de mayo de 1989.

33. Ibid. "Habitantes de Huaycán: deslindaron con el revisionismo". *El Diario*, p. 10. Lima, 14 de junio de 1989.

34. Ibid.

35. Clímaco Condori. CVR, testimonio n.º 020401001000001.

que atendían las necesidades inmediatas de la población. En febrero de 1989, Sendero organizó a pobladores de Huaycán y zonas aledañas para robar las cosechas de papa, maíz y hortalizas del terrateniente italiano Poppe.[36] Documentos internos del partido afirmaron que "la acción de levantamiento de cosecha en Huaycán fue culminada con éxito. Hubo una amplia participación de las masas, organizadas bajo el liderazgo del Partido, a través del EGP [ejército guerrillero popular]" (CVR 2003, V: 433). A pesar de que Sendero criticó el "revisionismo" de IU y el modelo de autogestión, nunca brindó una alternativa para obtener servicios básicos o asegurar la sobrevivencia a largo plazo.

La importancia de Huaycán para Sendero a fines de los años ochenta llevó a una mayor represión por parte de las fuerzas del orden. Los militares y policías intensificaron sus rastrillajes y allanamientos luego de la marcha de 1988 y establecieron puntos de control en la región este de Lima.[37] El 18 de junio de 1989, aniversario de la masacre de los penales, militares y policías realizaron su mayor intervención en Huaycán. En ese momento, el Estado y Sendero convirtieron a Huaycán en un campo de batalla, y los dirigentes locales se vieron obligados a modificar su lucha por el control de su comunidad. El carácter combativo de los pobladores de Huaycán en los años ochenta logró proteger el proyecto de desarrollo progresivo y llevó a la consolidación de la autogestión en el asentamiento. Sin embargo, la creciente presencia de la insurgencia senderista y la contrainsurgencia estatal alienaron a la comunidad, menospreciando sus esfuerzos colectivos como "revisionistas" o "terroristas," por lo que sus líderes, aferrándose a su autonomía, negociaron el papel de su comunidad en la lucha contra Sendero Luminoso.

36. Este fue el mismo Poppe que alguna vez fue propietario de las tierras de Huaycán.

37. "Fuerzas Armadas y policías en alerta". *El Diario*, pp. 4-5. Lima, 10 de mayo de 1989.

## El liderazgo de Pascuala Rosado y la formación de las rondas urbanas en Huaycán, 1991-1996

Al comenzar la nueva década, los pobladores de Huaycán se enfrentaron a rupturas en el tejido social de la comunidad. Las medidas de austeridad implementadas por el nuevo presidente, Alberto Fujimori, y la continua llegada de familias desplazadas hicieron evidentes las brechas socioeconómicas entre las áreas consolidadas y los nuevos asentamientos en las zonas marginales menos deseables. La victoria electoral de Fujimori en 1990 significó la derrota de los antiguos partidos políticos y evidenció la fragmentación de la IU. Una vez elegido, Fujimori dio marcha atrás a su rechazo a un *shock* económico y desplegó "medidas radicales de austeridad, reestructuración neoliberal y 'reinserción' en la comunidad internacional".[38] El llamado Fujishock arrasó con los sectores marginales del país, que vieron el precio del pan y la leche triplicarse y el precio del gas para cocinar multiplicarse por 25.[39]

En Huaycán, Sendero se alimentó del descontento entre los nuevos pobladores y socavó el trabajo de los dirigentes de las zonas establecidas. En los testimonios de la CVR y en mis entrevistas, los pobladores recordaron que Sendero logró controlar las partes altas del asentamiento, donde la electricidad, el agua y la seguridad eran escasas o inexistentes. Los senderistas aprovecharon la ausencia del Estado y llevaron a cabo campañas de intimidación dirigidas por "Luz," una residente de Huaycán e integrante de la Célula de Dirección de la Zona Este de Sendero

---

38. El enfoque en la economía, por el lado de Fujimori, favoreció a las élites empresariales de Perú y a la comunidad internacional, quienes apoyaron el Consenso de Washington como una salida a la creciente deuda de América Latina (Burt 2009).

39. "Peru's Poor Feel Hardship of 'FujiShock' Austerity". James Brooke, *New York Times*, p. 15. Nueva York, 12 de agosto de 1990.

(Jiménez Bacca 2000: 556). Durante la noche aparecieron consignas en edificios públicos y privados ("Viva el PCP" o "Viva el Nuevo Poder") seguidas por amenazas a quienes las borraran.

De acuerdo con la CVR, el reclutamiento más visible de Sendero en Huaycán se dio en la escuela Manuel González Prada, creada a principios de la década de 1990 (CVR 2003, V: 430). Informes de prensa de 1991 identificaron a la mayoría de los cuadros de Sendero en Huaycán como maestros, miembros del Movimiento Clasista Magisterial, una rama del Movimiento Revolucionario del Pueblo.[40] Uno de los fundadores de la escuela argumentó que el primer grupo de profesores eran jóvenes universitarios de La Cantuta, Villarreal y la Universidad Católica, sin afiliación senderista (CVR 2003, V: 431). Para algunos pobladores, fue la segunda ola de docentes que llegó de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, la Universidad del Centro y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes solicitaron trabajar en Huaycán y llevaron el discurso radical (CVR 2003, V: 431).[41] El deseo de trabajar en Huaycán fue sospechoso para los pobladores que sabían que "nadie quería trabajar en el colegio, zona roja, zona peligrosa, y [..] el colegio estaba en esteras, estaba a tierra".[42] En 1991, los militares ingresaron a la escuela, donde arrestaron y reemplazaron a los maestros.

En el mismo año, la mayoría de las acciones senderistas ocurrieron en la región Lima Este; fueron 154 incidentes en comparación con los 92 de 1990 (CVR 2003, V: 50). La escala de represión policial en el asentamiento, al igual que la presencia creciente de Sendero en las asambleas, socavó el control de los dirigentes de izquierda en Huaycán. Parte de las acciones

---

40. "Sendero está en Huaycán". Miguel Ramírez, *Oiga*, n.º 534: pp. 34-37. Lima, 13 de mayo de 1991.

41. Rey Magallanes y otros. CVR. Testimonio audio n.º 020401001000007.

42. Miguel Espejo. CVR, testimonio audio n.º 020401001000012.

involucraron la deslegitimación de los dirigentes, acusados de revisionismo (CVR 2003, V: 50). Sin embargo, un cable de inteligencia estadounidense reiteró que los intentos de Sendero para desarrollar sus bases en barrios marginales, lugares donde "la gente [está] en gran medida sin trabajo, electricidad, agua [...] [había] llegado a su límite".[43] Los esfuerzos de los senderistas para abordar la demanda de vivienda y condiciones de vida dignas de la población urbana se limitaron a la realidad del conflicto armado y su incapacidad de negociar con el Estado.[44]

El 5 de mayo de 1991, los pobladores de Huaycán, mediante elecciones universales, eligieron a Pascuala Rosado Cornejo como secretaria general de la CUAH. Ella se convirtió en la primera mujer en liderar Huaycán y la primera líder sin antecedentes políticos. Nacida en Cayma, Arequipa, Rosado llegó a Huaycán a mediados de la década de 1980, y participó en grupos locales de ayuda mutua y salud organizados por mujeres (CVR 2003, VII: 623). Madre de siete hijos y con solo educación primaria, enfrentó la crisis económica y vivió la precariedad alimenticia en Huaycán participando en comedores populares. Rosado formó parte del comité de electrificación de la zona A, y luego como su secretaria general logró que fuera electrificada. Su experiencia caracterizó el ingreso de las mujeres a la organización y el liderazgo comunitario a lo largo de la década de 1980.[45]

El trabajo de Rosado y su falta de afiliación política la llevaron a ser elegida secretaria general bajo el lema "Huaycán unido

---

43. "Can the revolutionaries win in Peru? The case for Sendero Luminoso". Cable de la Embajada de Estados Unidos, agosto de 1991.

44. Véase la trayectoria del proyecto senderista en Raucana en Abad 2022, Castillo 2006 y Luna-Victoria Indacochea 2022.

45. En la ciudad, "la participación de las mujeres en la construcción de nuevos barrios o terrenos baldíos invadidos por migrantes y ocupantes ilegales también las empujó a las esferas públicas de contacto y reivindicación" (Coral 1999: 338).

por el cambio". La propuesta de apoyar la candidatura de Rosado estuvo vinculada a su condición de mujer y madre, ya que en ese momento se necesitaba una figura no partidaria y asociada a "[...] la defensa de la vida y democracia" (Henríquez 2006: 51). Los dirigentes de IU en Huaycán utilizaron el liderazgo de una mujer como estrategia para contrarrestar la represión estatal en forma de rastrillajes, detenciones y la denominación "zona roja". Para Rosado y muchas dirigentes en este periodo, la prioridad durante su gestión se centró en mantener la autonomía de sus organizaciones, y así "[...] evitar [...] los conflictos partidarios" que caracterizaron a las directivas de la década de 1980 (Henríquez 2006: 50). Así, la victoria de Rosado también marcó el quiebre de la tolerancia previa respecto de Sendero y el MRTA, ya que en los años ochenta eran vistos como parte del conglomerado de las agrupaciones de la izquierda radical.

La nueva junta directiva propuso obras públicas para contrarrestar la influencia de Sendero. "Tuvimos que acabar con la conciliación y luchar para cambiar la imagen de Huaycán", declaró Pedro Arévalo, miembro de la junta directiva (Arévalo 1997: 72). Rosado comenzó a referirse a Huaycán como "La Ciudad de la Esperanza", nombre propuesto por la parroquia de San Andrés para contrastar con la denominación de "zona roja". Al no tener un pasado político, Rosado creó una gama de alianzas políticas y comunitarias durante su mandato. Su directiva estuvo además influida por su afiliación a dos importantes instituciones de la década: el Instituto Libertad y Democracia (ILD), dirigido por el economista Hernando de Soto, y un colectivo de ciudadanos franceses de Toulouse (Arévalo 1997: 70-71). La junta directiva también creó talleres para promover el espíritu empresarial y el comercio dentro de la comunidad. Por lo tanto, los dirigentes se comprometieron con organizaciones privadas, ONG y el Estado. No obstante, estas alianzas convirtieron a todos los involucrados en posibles blancos de Sendero.

Fueron la Iglesia católica y las ONG, no los partidos políticos, quienes apoyaron el trabajo de las mujeres en dirigencias y organizaciones (CVR 2003, III: 368). La Iglesia jugó un papel importante en el desarrollo de Huaycán desde su creación con el apoyo de las parroquias cercanas en Santa Anita, Ate-Vitarte y Santa Clara. La parroquia de Huaycán, bajo el liderazgo del padre Tadeo Pasini, "canalizó una ayuda sustancial de [la] congregación Monfort".[46] Además, la Iglesia creó programas de asistencia social administrados por la organización Caritas, una iniciativa de Usaid (Chávez Achong 2000: 94). El asesinato de Zacharias Magallanes, miembro de la ONG de desarrollo urbano y empresarial Ideas, fue el primer asesinato selectivo en contra de un trabajador de una ONG en Huaycán y Lima. El atentado fue parte de la escala de acciones senderistas que buscó eliminar a los principales dirigentes de base en los asentamientos de Lima.

El presidente Fujimori asumió el desarrollo de Huaycán desde su campaña electoral y lo utilizó como un desafío para demostrar su compromiso con su base y desplegar la guerra de baja intensidad. Sus visitas crearon proximidad con los dirigentes de Huaycán, y para muchos su victoria simbolizó la renovación política, el cambio y el fin del poder de una élite conservadora tanto de derecha como de izquierda (Arévalo 1997: 71). Fujimori estableció su papel como benefactor y ayudó a realizar varios de los proyectos en curso de la junta directiva. No obstante, quiso lograr más que obras en Huaycán. La guerra de baja intensidad en los barrios marginales de Lima comprendió cuatro etapas: el despliegue de campañas cívico-militares, la instalación de una base militar, la organización de rondas urbanas y la creación de una comisaría permanente. En Huaycán, la primera se inició en 1991 con varias incursiones militares en el

46. Los padres Adrián Tomasi y Jorge Anzonera también brindaron apoyo fundamental y ayuda internacional a la comunidad cristiana de Huaycán (Arévalo 1997: 7).

asentamiento. Soldados distribuyeron comida y tocaron música para los pobladores mientras registraban sus casas y arrestaban a personas sospechosas. A fines de 1991, los militares habían instalado su primera base contrainsurgente en la zona arqueológica de Huaycán (Castillo 2006: 203).

Testimonios brindados a la CVR destacan la violencia física que sufrió la población de Huaycán, incluyendo la detención arbitraria, el allanamiento en horas de la madrugada y la detención a jóvenes sin identificación.[47] Estos sucesos revelaron una creciente desconfianza entre los pobladores y los soldados. El régimen de Fujimori, a través del mando de las Fuerzas Armadas, socavó el trabajo de base de los partidos políticos. Los militares asumían que los senderistas habían infiltrado las asociaciones locales y sospechaban de dirigentes y organizaciones simplemente por tener políticas de izquierda. La contrainsurgencia se propuso neutralizar a Huaycán; esto significó la eliminación de la oposición política a través de la represión.

En la tercera fase de la guerra de baja intensidad y estrategia urbana, las rondas urbanas fueron concebidas en relación con las ya existentes rondas campesinas formadas en las comunidades rurales. No obstante, en la capital ya existían comités de autodefensa en los asentamientos humanos desde mediados del siglo XX. Creados por migrantes andinos en las periferias de Lima, fueron respuestas de base al abandono estatal; sin embargo, nunca le habían declarado la guerra a Sendero.

Desde la ocupación del terreno de Huaycán el 15 de julio de 1984, los pobladores organizaron un comité de autodefensa encargado de resguardar el territorio. Al frente del comité estaba el dirigente David Porras, quien permaneció a cargo durante los primeros años de Huaycán. El enfrentamiento con Patria Roja en 1984 reforzó la necesidad del frente de autodefensa de

---

47. Guadalupe Álvarez Huamán. CVR, testimonio n.º 020401000008.

salvaguardar la planificación urbana establecida por el equipo técnico. El comité de autodefensa se ocupó de proporcionar la seguridad en Huaycán durante los años ochenta y principios de los noventa, y fue compuesto por dos ramas: un equipo de seguridad con su autodefensa, administrada por cada campamento (posteriormente UCV), y los grupos operativos que funcionaban en el ámbito comunitario más amplio.[48]

Los grupos de autodefensa patrullaban su campamento y vigilaban a extraños o actividades ilícitas, incluyendo el contrabando de alcohol o robos. Cada campamento designó a un secretario de seguridad y autodefensa, y rotaban los turnos de patrullaje entre vecinos. La participación era obligatoria bajo la consigna "toda la gente para tener terreno tenía que hacer su guardia".[49] Los grupos de trabajo rotaban diariamente, lo que permitió que los residentes cumpliesen con su función en los comités además de su labor doméstica o trabajo fuera de Huaycán. Dado que la mayoría de los pobladores debían salir a trabajar, estos grupos de autodefensa protegían sus objetos de valor, que incluían ropas y radios. "Acá había ladrones, pero los ladrones sabían que no tenían que robar aquí, tenían que robar en otros sitios", recordó Lastra.[50] Estos grupos también escoltaban por las noches a mujeres y niños desde las paradas de autobús hasta sus hogares. Los grupos de autodefensa dentro de cada campamento brindaron seguridad, y algunos de sus miembros cargaban armas de fuego. De esta manera, el primer comité de autodefensa de Huaycán "nunca ha tenido [...] que ver con terrorismo ni violencia".[51]

---

48. David Porras. Entrevista con la autora. Lima, 20 de diciembre de 2019.
49. Ibíd.
50. Charles Jaime Lastra Domínguez. Entrevista con la autora. Lima, 7 de diciembre de 2019.
51. David Porras. Entrevista con la autora. Lima, 20 de diciembre de 2019.

Los grupos operativos, conocidos como "comandos", bajo la supervisión de Porras y otros dos miembros de la dirección central, eran elegidos en asambleas populares. Día y noche los comandos confiscaron alcohol, abordaron la violencia doméstica, recopilaron inteligencia y aplicaron castigos. Las mujeres también formaron parte de los comités de autodefensa y comandos, y constituían la mayor parte de los grupos de autodefensa. Su papel no solo quedó relegado a las labores domésticas, como cuidar a sus hijos y su hogar. Ellas también garantizaban la seguridad del campamento, y el comité de autodefensa dependió de los comedores populares, dirigidos por mujeres, para alimentar a sus voluntarios.

El gobierno de Fujimori reconoció la importancia de combatir la presencia subversiva en Huaycán sistemáticamente con la ayuda de los comités de autodefensa, y empezó a proveer apoyo a sus miembros, otorgándoles alimentos a cambio de su trabajo.[52] El presidente del comité electoral de Huaycán, Walter Rojas, percibió que el verdadero deseo del presidente era "crear un enorme ejército civil contra la subversión".[53] Las intenciones de Fujimori se hicieron claras tras los decretos legislativos 740 y 741, que subordinaron los comités de autodefensa a las Fuerzas Armadas en regiones declaradas en emergencia.[54]

El 23 de febrero de 1992, Pascuala Rosado contempló la creación de rondas urbanas en un programa de televisión.[55] En

52. Ibíd.

53. "Sendero está en Huaycán". Miguel Ramírez, *Oiga*, n.º 534: 37. Lima, 13 de mayo de 1991.

54. Decreto Legislativo n.º 741, "Reconocen a Comités de Autodefensa como organizaciones de la población para desarrollar actividades de autodefensa de su comunidad" (Lima, 8 de noviembre de 1991); y Decreto Legislativo n.º 740, "Norman la posesión y uso de armas por las Rondas Campesinas" (Lima, 8 de noviembre de 1991).

55. "Rondas urbanas against Sendero". Memo de la Embajada de Estados Unidos (marzo de 1992).

su aparición, Rosado promovió los comités de autodefensa urbanos autónomos y la necesidad de que estos mantuvieran su legitimidad dentro de su comunidad. El reciente asesinato de la teniente-alcaldesa de Villa El Salvador, María Elena Moyano, ejemplificó el peligro que representaba desafiar abiertamente a Sendero, particularmente el desafío de mujeres dirigentes, y expuso una estrategia senderista para manipular los vacíos de poder en las dirigencias locales. La legitimidad creada por dirigentes femeninas, desde la preocupación por la alimentación hasta su influencia como creadoras de opinión pública, no podía coexistir con la estrategia de Sendero (Henríquez 2006: 48-49). A pesar del riesgo para su vida, Rosado entendió que jugaría un papel definitivo para frenar los avances subversivos.

Desde la instalación de la base militar en Huaycán, en noviembre de 1991, el mayor impulsor de las rondas urbanas subordinadas a las Fuerzas Armadas fue el general Pérez Documet, quien fue designado como jefe de la Primera División de Fuerzas Especiales a cargo de combatir la contrainsurgencia en las regiones Sur y Este de Lima en 1992. Anteriormente, estuvo en el Frente Mantaro, donde promovió que las rondas campesinas se armaran. El general justificó esta medida para combatir a Sendero, y aplicó la misma estrategia de armar a las rondas en la ciudad. En Huaycán, los decretos legislativos 740 y 741 subordinaron el comité de autodefensa a la base militar. El general justificó su apropiación de los comités tras publicarse en 1992 la tesis de los coroneles Arturo Rodríguez, Antonio Padilla y el arquitecto Emilio Ponce, titulada “Unidad experimental modelo para la formación de cuerpos de autodefensa”. El estudio, realizado con la ayuda de los dirigentes de Huaycán, utilizó al comité de autodefensa existente como modelo para eliminar a las fuerzas subversivas a través de la contrainteligencia (Tapia 1995: 15). A pesar de los hallazgos del estudio, que reforzaban la importancia del control comunitario de los comités, Pérez Documet impuso su completa subordinación a los militares.

En julio de 1992, tres meses después del golpe del 5 de abril, Fujimori anunció la creación de las rondas urbanas de Huaycán como parte de su nueva estrategia de contrainsurgencia encargada al general Pérez Documet. La declaración fue un duro golpe para los dirigentes, en especial para Rosado, quien manifestó a los medios que las palabras del presidente parecieron una "cachetada".[56] Hasta ese momento, Rosado mantuvo su posición de defender la autonomía de los comités de autodefensa. Luis Chávez Rivas, jefe del comité de autodefensa de Huaycán, proclamó: "Nosotros no podemos ser carne de cañón del Estado ni de Sendero Luminoso: nuestra lucha más bien es política que militar".[57] Los comités de autodefensa priorizaban la seguridad comunal, preocupándose de delitos menores como la prostitución, la corrupción y la violencia doméstica. La abrupta declaración del presidente llevó a que muchos voluntarios renunciaran a sus puestos.[58] En adelante, las rondas urbanas transformaron a los comités de autodefensa en milicias subordinadas a la base militar y los ronderos estarían a cargo de proporcionar inteligencia acerca de posibles subversivos en la comunidad.

La creación de las rondas urbanas propició fricciones entre los dirigentes de Huaycán, y muchos culparon a Rosado por venderse al régimen de Fujimori. Un dirigente recordó la presión que tenía la junta directiva por parte del Estado: "Ahí parece que obligaron a ciertos dirigentes a ser parte de todo eso. La exigencia tal vez ha sido con parte de la condicionalidad de te doy obras, de represión, dame nombres o permíteme hacer esto".[59] Igualmente, Rosado y la junta directiva recibieron

56. "Engaño en Huaycán". *Caretas*, pp. 33-37. Lima, 20 de julio de 1992.

57. Ibíd., p. 34.

58. Ibíd., pp. 33-37.

59. Charles Jaime Lastra Domínguez. Entrevista con la autora. Lima, 18 de enero de 2020.

amenazas de Sendero en forma de notas o murmullos en las calles (Butteler 1997: cap. 10). Sin embargo, Rosado sabía que proporcionar obras públicas sería clave para recuperar la confianza de la comunidad y así enfrentar a los insurgentes. Por tal razón, ella y la junta directiva se reunieron con los militares, trabajando también con el exsenador de IU Carlos Tapia como intermediario para establecer ciertos términos respecto del control de Huaycán. "En esas reuniones [...] nosotros no íbamos solos [...] [Pérez Documet] ya sabía, no éramos gente novata [...] teníamos experiencia política, [...] de todas maneras tenía que dialogar y se lograba algo", recordó Arévalo.[60] Si no establecían un diálogo, los dirigentes temían que el Ejército entrara a Huaycán sin restricciones. Por lo tanto, negociaron con los militares con la expectativa de salvaguardar sus organizaciones comunales.

El costo del control militar de las rondas urbanas en Huaycán implicó la creación de un trabajo de inteligencia entre dirigentes y pobladores, el cual se sirvió del conocimiento de los dirigentes acerca de quiénes eran subversivos en Huaycán y quiénes entre ellos representaban verdaderas amenazas. "Los únicos que sabíamos quiénes son y quiénes no son de Sendero, o eran de MRTA o de otro partido, somos nosotros. [...] los únicos que podíamos hacer una labor de inteligencia efectiva éramos nosotros [...] aparte conocíamos la trayectoria, como éramos también de izquierda", dijo Arévalo.[61]. Los dirigentes tenían que decidir si denunciar o tolerar a los subversivos, sabiendo que no existían garantías sobre la seguridad de los detenidos. La etapa final de la estrategia de contrainsurgencia urbana culminó con la construcción de la comisaría, que también fue una iniciativa

60. Pedro Arévalo. Entrevista con la autora. Zoom, 11 de febrero de 2021.
61. Ibíd.

de Rosado y su junta directiva como una forma de llevar al Estado a Huaycán.

Huaycán sirvió como un laboratorio de la contrainsurgencia en donde Fujimori creó la percepción de un frente urbano cohesivo contra Sendero. El interés del presidente por las rondas urbanas, sin embargo, se disipó después de la captura de Abimael Guzmán en septiembre de 1992. Los dirigentes recordaron que el gobierno abandonó a su suerte a las rondas cuando dejó de proporcionar alimentos a los miembros del comité de autodefensa a través del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria-Pronaa (Butteler 1997: cap. 10). Esta medida significó una traición a los dirigentes que confrontaron políticamente a Sendero, y los dejó vulnerables a ataques senderistas. Rosado y su junta directiva adoptaron estilos de vida clandestinos: nunca dormían en la misma casa y evitaban cualquier horario rutinario. Los dirigentes también se enfrentaron al Ejército, que incrementó su represión en contra de los dirigentes que desaprobaban al gobierno. Los militares encontraron una lista de presuntos líderes de Sendero en Huaycán en la computadora de Guzmán, la cual incluía los nombres de Pascuala Rosado y su junta directiva (Arévalo 1997: 76). Después se sabría que las lista nombraba víctimas de futuros asesinatos, no de insurgentes (Arévalo 1997: 76).

Los senderistas que seguían operando dentro de Huaycán luego de la captura de Guzmán en 1992 se enfocaron en eliminar a los dirigentes locales y a los miembros de los comités de autodefensa. El primer asesinato selectivo contra los ronderos fue el de Miguel Galindo Cabezas, seguido por una emboscada al local comunal del comité de autodefensa, donde murió el rondero Erasmo Flores Arias.[62] Un tercer asesinato selectivo

62. Charles Jaime Lastra Domínguez. Entrevista con la autora. Lima, 7 de diciembre de 2019. CVR, caso n.º 1007295, testimonio n.º 101346.

en 1994 involucró al rondero y dirigente David Alberto Chacaliaza.[63] Rosado también recibió amenazas, y Sendero intentó asesinarla junto a sus hijos en abril de 1993.[64] Temiendo por su vida, Rosado partió al exilio en Chile con la ayuda de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Alta Comisión para los Refugiados de las Naciones Unidas (Arévalo 1997: 75). Al retirarse el apoyo del Estado, Sendero logró desmantelar el liderazgo central de Huaycán.

Después de refugiarse en Chile, Rosado regresó a Perú, y en diciembre de 1995 volvió a su casa e hijos en Huaycán. En lugar de reinsertarse en la dirigencia de Huaycán, optó por mantener económicamente a su familia trabajando en la fábrica textil Textimax. No obstante, Rosado "se sintió vigilada", y pidió seguridad a la policía en varias ocasiones, pero sin éxito.[65] Su preocupación culminó cuando Sendero la asesinó el 6 de marzo de 1996. Ese día, Rosado caminaba frente al mercado de la avenida Comercial de Huaycán cuando sujetos encapuchados se acercaron y le dispararon dos tiros en la cabeza. Los asesinos dejaron volantes de propaganda y detonaron un pequeño cartucho de dinamita en su cuerpo. Los pobladores de Huaycán enterraron a Rosado junto a Rafael Flores Echevarría, el mártir de la marcha de 1988. El ataúd de Rosado fue escoltado por pobladores, senadores, miembros de ONG y el ministro de la Presidencia, Jaime Yoshiyama Tanaka.[66]

El asesinato de Rosado resucitó los debates sobre la presencia de Sendero y el MRTA en los asentamientos humanos de Lima y la responsabilidad del gobierno de proteger a los dirigentes

---

63. Dircote, PNP, 1995, atestado 15, atestados 13-18, tomo 2.
64. Acta de denuncia, Policía Nacional del Perú, Santa Clara (26 de abril de 1993). CVR, testimonio n.º 102143.
65. Flavio Fryland Olazabal Salinas. CVR, testimonio n.º 102143.
66. "Seguiremos tu lucha contra la violencia ciega". *La República*, p. 11. Lima, 8 de marzo de 1996.

locales. Los medios cubrieron la muerte de Rosado ampliamente y denunciaron la barbarie de Sendero. La muerte anunciada estremeció a los dirigentes de Huaycán, ya que seguían siendo posibles blancos de Sendero. Entre los volantes senderistas que quedaron junto al cuerpo de Rosado había una lista de 14 nombres, incluida la junta directiva de Rosado.[67] La amenaza forzó a Arévalo a buscar exilio en Noruega.[68] La embajada de Estados Unidos también les ofreció asilo en Noruega a otros dirigentes de la junta directiva, de los cuales solo Javier Ramos Figueroa y su esposa, la arquitecta María Estrada, aceptaron la oferta.[69] La policía arrestó a los responsables del asesinato entre 1996 y 1998: Glicerio Aguirre Pacheco, acusado de planear el asesinato, y el compañero "Felipe," ambos miembros de un escuadrón de aniquilamiento de Sendero.[70] En Huaycán, el asesinato de Rosado alimentó el miedo a Sendero y relativizó sus logros. Con su muerte, ocurrida cerca de cuatro años desde que se crearan las rondas urbanas, concluyó la venganza senderista de eliminar a la directiva huaycanense que logró arrebatarles el apoyo popular.

## Epílogo: la memoria de la resistencia

La dirigencia de Pascuala Rosado ha sido celebrada y resignificada desde que comenzó su mandato en 1991 hasta el presente. La construcción de su memoria sigue el modelo examinado por Jo-Marie Burt en el caso de María Elena Moyano. Burt describe la apropiación de la memoria de Moyano como "víctima

67. Congreso de la República, Comisión de Derechos Humanos y Pacificación (20 de marzo de 1996). CVR, caso n.º 102143: 4.
68. Pedro Arévalo. Entrevista con la autora. Zoom, 11 de febrero de 2021.
69. Ibíd.
70. Consejo Supremo de Justicia Militar, n.º 012-TP-98-L (30 de septiembre de 1998).

emblemática" de Sendero y analiza cómo el gobierno fujimorista, Sendero Luminoso y la IU lo hicieron para validar sus ideologías divergentes (Burt 2011: 71). En el caso de Pascuala Rosado, el Estado y Sendero adoptaron los mismos métodos en relación con Moyano para narrar el legado de su dirigencia. En Huaycán, la memoria de Rosado y su junta directiva permanece dividida entre los que admiraron su confrontación con Sendero y aquellos que interpretaron su lucha como un error que finalmente resultó en su muerte.

A diferencia de Moyano, quien fue asesinada durante el recrudecimiento de las acciones senderistas en la capital, Rosado fue asesinada luego de la captura de Guzmán, y el gobierno fujimorista se apropió de su figura como mujer, madre y víctima de Sendero para legitimar su régimen. Sin embargo, durante la dirigencia de Rosado, el régimen fujimorista forzó su colaboración y la de su junta al proclamar la creación de las rondas urbanas contra Sendero sin tomar en cuenta su estrategia para combatir la insurgencia políticamente. Como en el caso de Moyano, Sendero acusó a Rosado de ser una "agente del Estado" y del "revisionismo", con lo que buscó deslegitimar a las dirigentes de base acusándolas de corrupción e incitando la desconfianza entre los pobladores. Esta labor dio fruto dentro de Huaycán, ya que muchos pobladores se reusaron a condenar a Sendero después del asesinato. Los testimonios brindados a la CVR entre 2002 y 2003 revelaron que muchos pobladores seguían pensando que el asesinato pudo ser justificado, "por algo habrá sido" (Henríquez 2006: 53).

Los medios y el resto de la sociedad limeña condenaron el asesinato y elevaron a Rosado como figura de la resistencia a Sendero, cuya muerte fue atribuida a la falta de protección del Estado. Como en el caso de Moyano, la imagen principal de Rosado en los medios nacionales e internacionales fue la de una mártir que dio su vida en la lucha contra los subversivos (Burt 2011: 75). Sin embargo, Rosado nunca militó en los partidos de

izquierda como lo hizo Moyano, y como consecuencia su militancia no fue ocultada por los medios ni el gobierno fujimorista. En el periodo del posconflicto, Rosado ha sido recordada en el *Informe final* de la CVR al igual que en el Lugar de la Memoria, Tolerancia e Inclusión Social. En el escenario nacional, es una figura que representa la lucha contra Sendero desde las bases. Poco se comenta de las divergencias de Rosado y su junta con el general Pérez Documet, la presencia de la base militar y el control de las rondas urbanas. Las negociaciones de Rosado con las Fuerzas Armadas han sido omitidas de la memoria oficial, formando parte de lo que Burt llama la "dicotomía" que facilitó ubicar a Moyano (y Rosado en este caso) como una aliada del Estado contra Sendero (Burt 2011: 75, 77).

En Huaycán, la memoria de Pascuala Rosado es controvertida. Muchos la celebran como mártir de la comunidad, y desde 1998 existe un monumento con el nombre de Rosado en la plaza central; pero prevalecen opiniones discrepantes, como lo expresó un dirigente en 2019: "Las personas que han hecho políticas de colaboración con el gobierno, incluso menoscabando la organización comunal, los elevan como héroes".[71] Para muchos, el resultado de esta alianza fue el asesinato de Rosado y la disolución de su directiva. "Según Sendero, [ellos tenían] una deuda de sangre. Según ellos, porque a raíz de [la creación de las rondas] parece que habían caído muchos", recordó Porras.[72] No obstante, para los dirigentes de la junta directiva de Rosado, la colaboración con el Estado fue una estrategia crucial para proteger a Huaycán. Arévalo recordó que "[...] teníamos ese problema de ver todas las posibilidades de mejora para nosotros".[73] Rosado no solo logró la victoria política sobre Sendero en las

71. Charles Jaime Lastra Domínguez. Entrevista con la autora. Lima, 7 de diciembre de 2019.

72. David Porras. Entrevista con la autora. Lima, 3 de diciembre de 2019.

73. Pedro Arévalo. Entrevista con la autora. Zoom, 11 de febrero de 2021.

elecciones de 1991, sino que también disminuyó su influencia en Huaycán a través de obras públicas. Al trabajar con Fujimori, los dirigentes no buscaron clientelismo, sino construir sus proyectos y su legitimidad. Consiguieron así los estudios técnicos y la financiación a través de conexiones con la Iglesia y las ONG (Arévalo 1997: 74). La dirigencia de Rosado abordó las demandas inmediatas de la población de Huaycán en el periodo del conflicto; demandas que fueron exasperadas por el Fujishock y la epidemia de cólera.

La trayectoria del pueblo de Huaycán y las experiencias de sus dirigentes señalan que, en la ciudad, los senderistas se enfrentaron a comunidades politizadas que hicieron propuestas y demandas a las que los insurgentes no pudieron responder significativamente. El rápido crecimiento de la población limeña —en parte por las consecuencias del propio conflicto, que forzó a miles de familias a desplazarse de la sierra a las periferias de la ciudad— contribuyó a la expansión descontrolada de comunidades como Huaycán, en las cuales la heterogeneidad de los residentes y sus exigencias quedaron fuera del alcance de Sendero. Este crecimiento urbano fue en parte lo que promovió la creación de Raucana en 1990, el único Comité Popular Abierto en Lima y modelo de escala pequeña que sí logró ser controlado por Sendero. Los dirigentes de Huaycán lucharon constantemente por su legitimidad como líderes ante los pobladores, y sus acciones evidencian la colaboración con los partidos políticos, el gobierno y organizaciones sin fines de lucro para mejorar la calidad de vida de su comunidad. Igualmente, el caso de Huaycán revela las negociaciones de los dirigentes con las Fuerzas Armadas que penetraron en los asentamientos humanos en los años noventa, así como sus consecuencias en aquellos que se propusieron trabajar con el Ejército como estrategia para mantener el control de la comunidad; consecuencias que tuvieron un alto costo en vidas humanas y un alto costo social pagado por una generación de dirigentes.

Este libro fue publicado por primera vez en inglés con el título *Land without masters: agrarian reform and political change under Peru's military government* por University of Texas Press, en Austin, Estados Unidos de América, el año 2021.


Serie: Estudios Históricos, 94

Colección: Perú Ayer, 3

© IEP Instituto de Estudios Peruanos
Horacio Urteaga 694, Lima 15072
Telf.: (51-1) 200-8500
Correo-e: libreria@iep.org.pe
www.iep.org.pe

ISBN del volumen: 978-612-326-241-9
ISBN de la colección: 978-612-326-165-8
ISSN: 1019-4533

Impreso en Perú
Primera edición: Lima, septiembre de 2023
800 ejemplares
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú: 2023-08148
Registro del proyecto editorial en la Biblioteca Nacional: 31501132300446

| | |
|---|---|
| Traducción: | Raúl Asensio |
| Asistente editorial: | Yisleny López |
| Corrección: | Sara Mateos |
| Diagramación: | Silvana Lizarbe |
| Carátula: | Apollo Studio |
| Revisión de arte portada: | Gino Becerra |
| Cuidado de edición: | Odín del Pozo |



---

CANT, Anna

*Tierra sin patrones. Reforma agraria y cambio político durante el gobierno militar (1969-1975).* Lima, IEP, 2023. (Estudios Históricos, 94)

1. REFORMA AGRARIA; 2. GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LA FUERZA ARMADA; 3. ESTRUCTURA AGRARIA; 4. COOPERATIVAS AGRARIAS; 5. COMUNIDADES CAMPESINAS; 6. PROPIEDAD DE LA TIERRA; 7. HISTORIA REGIONAL; 8. PIURA; 9. CUSCO; 10. TACNA; 11. PERÚ

W/05.01.01/E/94

# Índice

## Abreviaturas y acrónimos

| | |
|---|---|
| AGN | Archivo General de la Nación |
| Alfin | Alfabetización Integral, programa |
| APRA | Alianza Popular Revolucionaria Americana |
| CAEM | Centro de Altos Estudios Militares |
| CAP | Cooperativa agraria de producción |
| CBC | Centro Bartolomé de Las Casas, Cusco |
| CCP | Confederación Campesina del Perú |
| Cedep | Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación |
| Cencira | Centro Nacional de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria |
| Cipca | Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, Piura |
| CNA | Confederación Nacional Agraria |
| CRAV | Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda |
| Desco | Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo |
| DGRAAR | Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural |
| DPDRA | Dirección de Promoción y Difusión de la Reforma Agraria |
| ELN | Ejército de Liberación Nacional |
| Enrad | Empresa Nacional de Radiodifusión |
| ESEP | Escuela Superior de Educación Profesional |
| Fartac | Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco |
| Fartamo | Federación Agraria Revolucionaria de Tacna y Moquegua |
| FDCC | Federación Departamental Campesina del Cusco |
| Fedecap | Federación Departamental de Campesinos de Piura |
| MIR | Movimiento de Izquierda Revolucionaria |
| MSP | Movimiento Social Progresista |
| ONG | Organismo No Gubernamental |
| PCP | Partido Comunista del Perú |
| SAIS | Sociedad agrícola de interés social |
| Sinamos | Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social |
| SIP | Sociedad Interamericana de Prensa |
| Sutep | Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú |
| UCP | Unidad Comunal de Producción |
| Unesco | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura |
| UNO | Unión Nacional Odriista |
| UPC | Unidades Productivas Comunales |
| VR | Vanguardia Revolucionaria |

# Introducción

A lo largo del siglo XX, la desigualdad en el acceso a la tierra y el control abusivo de la mano de obra rural dieron lugar a intensas luchas políticas en toda América Latina.[1] Durante la Revolución mexicana, la reforma agraria se convirtió en un llamamiento a las armas para los campesinos que habían sido desposeídos en el transcurso del gobierno capitalista liberal de Porfirio Díaz.[2] Fidel Castro describió la reforma agraria como "una cuestión de vida o muerte" y la consideró esencial para resolver los problemas de pobreza rural, falta de tierras y subempleo en Cuba.[3] En Chile, tanto Eduardo Frei como Salvador Allende defendieron esta reforma como un medio para garantizar una mayor igualdad social.[4] Reformas similares se llevaron a cabo en Ecuador, Bolivia, América Central y el Caribe desde mediados del siglo XX.[5] En cada uno de estos países y

1. Long y Roberts, "Agrarian Structures", p. 563.
2. Otero, "Agrarian Reform in Mexico".
3. Guerra, *Visions of Power in Cuba*, p. 59.
4. Tinsman, *Partners in Conflict*.
5. Thiesenhusen, ed., *Searching for Agrarian Reform in Latin America*.

regiones, la propiedad de la tierra se consideraba el eje de la distribución de la riqueza y los derechos políticos.

Cuando el general Juan Velasco Alvarado tomó el poder en 1968, la desigualdad de la tierra era en el Perú una de las más pronunciadas de la región. Grandes cantidades de tierra se concentraban en unos pocos latifundios, mientras que un enorme número de campesinos sobrevivía en pequeñas parcelas y/o gracias al trabajo asalariado en los latifundios.[6] El censo de 1961 revela que el 0,2% de los propietarios más ricos del país poseía el 72,9% de las tierras agrícolas, mientras que el 34,1% más pobre solo tenía el 0,7%.[7] Los intentos de cambiar esta situación habían fracasado debido a los arraigados intereses de las élites y a la escasa voluntad política. Sin embargo, el gobierno de Velasco situó la reforma agraria en el centro de su visión del "nuevo Perú". La Ley de Reforma Agraria de 1969 inició una ambiciosa redistribución de la tierra a cooperativas agrarias y se propuso abolir el monopolio sobre la propiedad de la tierra.

Más de cincuenta años después de su inicio, la reforma agraria sigue siendo uno de los temas más controvertidos de la historia moderna del Perú. Mientras que los comentaristas de derecha la caracterizan como una "robolución" que expropió injustamente la tierra y arruinó la economía

---

6. Este trabajo no siempre era remunerado. Por ejemplo, el yanaconaje, una práctica laboral que tenía sus orígenes en la sociedad andina prehispánica, consistía en un acuerdo altamente explotador entre el terrateniente y el trabajador (yanacona). Mientras que el terrateniente proporcionaba el acceso a la tierra, el agua, la maquinaria y el capital, el yanacona no recibía ningún salario y debía cultivar el producto determinado por el terrateniente y vendérselo exclusivamente. Según José Matos Mar, una versión modernizada del yanaconaje persistió en el valle de Chancay (Lima) hasta bien entrada la década de 1960. Matos Mar, *Yanaconaje y reforma agraria en el Perú*.

7. Cleaves y Scurrah, *Agriculture, Bureaucracy, and Military Government in Peru*, p. 32. Estas cifras eran comparables a la situación en el Ecuador, donde en 1954, el 1% de las unidades agrícolas controlaba el 64% de la tierra agrícola, mientras que el 82% de las unidades agrícolas tenía menos de cinco hectáreas y constituía el 11% de la tierra. Forster, "Minifundistas in Tunguraghua, Ecuador", p. 93. El dominio de los latifundios era considerablemente menor en Argentina, donde, en 1970, el 36,9% de la tierra estaba ocupada por latifundios y el 3,4% por minifundios, dejando el 59,7% restante a explotaciones de tamaño medio. Todaro, *Economic Development in the Third World*, p. 295.

peruana,[8] otro sector enfatiza el hecho de que puso fin al sistema semifeudal de explotación económica y opresión que hasta entonces existía en las zonas rurales peruanas.[9] En cierto modo, estas perspectivas contrapuestas reflejan los puntos de vista de los ganadores y perdedores de lo que fue una importante redistribución del poder económico y político (el 45% de la tierra agrícola del Perú se redistribuyó de los grandes terratenientes a los campesinos). Pero también son una herencia de los términos fuertemente ideologizados en los que se justificó y llevó a cabo la reforma.

La reforma agraria peruana no fue un proceso neutral, supervisado por tecnócratas en oficinas gubernamentales distantes, sino que fue promovida activamente a través de intervenciones del gobierno en los espacios locales, la educación y la comunicación de masas. En todo el país, se animó a los campesinos a imaginar un mundo más justo desde el punto de vista social, en el que sus oportunidades de vida no estuvieran limitadas por la voluntad del hacendado. Como señalaba uno de los afiches producidos en la época, la reforma agraria ofrecía la perspectiva de una "tierra sin patrones". En un esfuerzo propagandístico sin precedentes en la historia del Perú, el gobierno de Velasco contrató a cientos de artistas, intelectuales y promotores para articular y difundir su reforma agraria.

Partiendo de estas premisas, este libro analiza los cambios políticos y culturales que trajo consigo la reforma agraria, tratando de ir más allá de su éxito o fracaso como política agraria y examinando su importancia como proyecto ideológico. Al estudiar los esfuerzos del gobierno para promoverla a escalas local, regional y nacional, se muestra cómo esta reforma abrió nuevos debates políticos sobre la ciudadanía, la identidad nacional y el papel del Estado que, a su vez, transformaron la cultura política peruana.

---

8. Martha Meier Miró Quesada, "Túpac Mouse", *El Comercio*, 4 de junio de 2014, disponible en: <http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/tupac-mouse-martha-meier-m-q-noticia-1733944>.
9. "La reforma agraria de 1969", *La Revista Agraria* n.° 108 (2009): 19.

## Contexto histórico

El 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado, comandante en jefe de la Fuerza Armada, tomó el control del Palacio de Gobierno. Alegando la inestabilidad política del gobierno y la revelación de un reciente escándalo de corrupción, destituyó al presidente democráticamen te elegido, Fernando Belaunde Terry, y dio inicio al llamado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Como señala el historiador Thomas Wright, el golpe de Velasco se produjo al final de una década marcada por intentos frustrados de reproducir la Revolución cubana en toda América Latina. El gobierno militar peruano "abrió una nueva perspectiva para la revolución en América Latina: la perspectiva de la revolución, o al menos de la reforma estructural, desde arriba".[10]

El gobierno nacionalista de Omar Torrijos en Panamá (1968-1981), el gobierno militar de izquierda de Juan José Torres en Bolivia (1970-1971) y el régimen militar de Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador (1972-1976), que se inspiraron explícitamente en el ejemplo peruano, mostraron un reformismo militar similar.[11] En parte, la toma del poder por parte de los militares peruanos y la búsqueda de reformas desde arriba reflejaban una tendencia en toda la región a poner el cambio estructural en manos de las Fuerzas Armadas, consideradas como el sector social más capaz y digno de confianza en medio de la agitación política de la Guerra Fría. Sin embargo, a diferencia de los gobiernos militares de Brasil, Argentina y Chile, que defendieron los privilegios de las élites y utilizaron la amenaza del comunismo como justificación moral, el discurso del velasquismo apuntaba a acabar con la oligarquía y generar cambios sociales en favor de la mayoría.[12]

---

10. Wright, *Latin America in the Era of the Cuban Revolution*, p. 112. Traducción del inglés.
11. Ibíd.
12. El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada también se diferenciaba de anteriores gobiernos militares del Perú en su carácter institucional, no vinculado a un general o caudillo carismático, como se reflejaba en su propia denominación oficial. Véase North, "Orientaciones ideológicas de los dirigentes militares peruanos". Aunque por razones de estilo me refiero al régimen como el "gobierno de Velasco",

La radicalidad de los cambios propuestos por el gobierno militar queda clara en el lenguaje utilizado en su programa político, el Plan Inca, que comienza así: "La Revolución de la Fuerza Armada llevará a cabo un proceso de transformación de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales, con el fin de lograr una nueva sociedad, en la que el hombre y la mujer peruanos puedan vivir con libertad y justicia".[13] El plan establecía un total de 31 objetivos en diferentes áreas políticas, incluidas la nacionalización de la industria petrolera, la reforma minera e industrial, la refinanciación de la deuda nacional, la reforma agraria, una revisión completa del sistema educativo y una importante inversión estatal en salud y vivienda.[14] Tras la nacionalización de la International Petroleum Company, de propiedad estadounidense, el 9 de octubre de 1968, la reforma agraria fue la segunda política más importante que puso en práctica el gobierno de Velasco.

La Ley de Reforma Agraria (Decreto Ley n.° 17716), promulgada el 24 de junio de 1969, pretendía sustituir la estructura agraria existente de latifundios y minifundios por "un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra, que contribuya al desarrollo social y económico de la Nación, mediante la creación de un ordenamiento agrario que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario".[15] En concreto, la ley preveía la expropiación de las tierras que superasen un número máximo de hectáreas (150

---

hay que recordar que el gobernante peruano no desarrolló un culto a la personalidad similar al de líderes como el argentino Juan Perón o el brasileño Getúlio Vargas. Para profundizar en las características particulares del reformismo militar en el Perú, véase Kruijt, *La revolución por decreto*; y Villanueva, *El CAEM y la revolución de la Fuerza Armada*.

13. Velasco Alvarado, *Plan Inca*, p. 1.
14. El gobierno de Velasco también fue pionero en la creación de comunidades industriales, concebidas como un mecanismo para reformar las empresas capitalistas y aumentar la participación de los trabajadores en la propiedad, la gestión y los beneficios. Al igual que la reforma agraria, la creación de comunidades industriales desafiaba el poder de los propietarios de las empresas y proponía una reorganización de la economía de acuerdo con objetivos sociales y no con principios capitalistas. Franco y Ames, *Perú: participación popular*; Knight, "New Forms of Economic Organization in Peru".
15. Decreto Ley n.° 17716, título 1, artículo 1.

en la costa y 15-55 en la sierra) y su adjudicación a cooperativas agrarias de nueva creación, comunidades campesinas o demandantes individuales.[16] También sometía las condiciones de trabajo en el campo a la regulación estatal y prohibía prácticas neofeudales, como el arrendamiento a cambio de mano de obra.

El alcance nacional de la reforma agraria de 1969 le dio mucho más peso que a los intentos anteriores, pero la aplicación de una única ley en un país con una topografía, unos contextos socioeconómicos y unos sistemas agrícolas extremadamente diversos supuso grandes retos. El modelo de cooperativa de producción previsto por la reforma tenía cierto sentido en las haciendas costeras, donde la industrialización de la agricultura y una sólida presencia sindical hacían posible la colectivización. Sin embargo, este modelo era mucho más difícil de implementar en las haciendas tradicionales productoras de lana de la sierra central y sur, caracterizadas por poblaciones muy dispersas y estructuras comunitarias que implicaban ayuda mutua, pero no una producción o propiedad de la tierra colectivizada. Las diferencias culturales, como el predominio del quechua y la persistencia de relaciones neofeudales entre hacendados y peones indígenas, también complicaron la tarea de llevar a cabo una reforma agraria homogénea y concebida desde Lima. Consciente de estos retos, el gobierno de Velasco no se limitó a aprobar la nueva legislación, sino que creó una serie de organismos gubernamentales encargados de promover y aplicar la reforma.

Dado que múltiples sectores de la población ya demandaban una reforma agraria cuando se produjo el golpe de 1968, la insistencia del gobierno de Velasco en promover y movilizar el apoyo a la reforma agraria en las zonas rurales podría parecer contraintuitiva. Sin embargo, el gobierno consideró que la promoción efectiva de la reforma agraria era vital por varias razones. En primer lugar, era importante hacer conscientes a los

16. Estas cifras se refieren a las tierras de cultivo bajo riego. Mientras en las provincias de la costa había un solo límite para todas las tierras de cultivo bajo riego, en la sierra y ceja de selva el límite variaba por provincia entre 15 y 55 hectáreas. Existían otros límites para las tierras de cultivo de secano, las tierras cubiertas por pastos naturales y las tierras forestales. Véase Decreto Ley n.° 17716, título 3.

trabajadores de las haciendas de sus derechos, para que pudieran organizarse y resistir los intentos de los terratenientes de despojar sus propiedades antes de la llegada de los administradores de la reforma. En segundo lugar, el gobierno quería difundir su visión de la reforma agraria, en lugar del enfoque más radical que proponían las comunidades campesinas y los sectores armados de izquierda. Mientras que las ocupaciones de tierras lideradas por los campesinos a principios de la década de 1960 y los efímeros movimientos guerrilleros de 1965 utilizaban la acción directa para recuperar las tierras, el gobierno militar creía que la reforma agraria debía ser dirigida por el Estado.[17] En tercer lugar, el gobierno de Velasco pretendía vincular su reforma agraria con una visión más amplia del cambio social, que incluía la incorporación de las poblaciones campesinas marginadas y una distribución más equitativa de la riqueza y el poder político. En este sentido, la reforma agraria no solo era una oportunidad para redistribuir los recursos, sino también para difundir nuevas ideas de colectivismo e identidad nacional.

Todas estas tareas requerían que los funcionarios del gobierno actuaran de forma más parecida a un partido político que a una burocracia neutral, articulando la ideología que sustentaba la reforma agraria y enfatizando su importancia dentro del llamado proceso revolucionario. Al principio, este activismo estatal estuvo a cargo de organizaciones *ad hoc*, como la Dirección de Promoción y Difusión de la Reforma Agraria (DPDRA). En 1971, sin embargo, el gobierno creó dos organismos mucho mayores, que adoptaron un enfoque más sistemático: el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (Sinamos), cuya función abarcaba la promoción de todo el programa de reformas del gobierno, y el Centro Nacional de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria (Cencira), con un enfoque más específico. A través de intervenciones

17. En la práctica, esta línea fue difícil de mantener, como observa Colin Harding en el caso de Piura: "En la mayoría de los casos de ocupaciones de tierras —más de 80 en Piura a mediados de 1973— las autoridades de la reforma se han visto obligadas a aceptar un hecho consumado, expropiar la tierra muy rápidamente y entregarla a una cooperativa de los trabajadores permanentes y temporales, a pesar de que las invasiones están expresamente definidas como un acto de sabotaje contra la reforma agraria". Harding, "Agrarian Reform", p. 13. Traducción del inglés.

en la educación, la movilización política y los medios de comunicación, estas organizaciones buscaban neutralizar la oposición política y reforzar la ideología del gobierno. Este libro se centra en estas intervenciones y en sus repercusiones en tres regiones del Perú.

## Temas de investigación

A pesar de la importancia ampliamente reconocida de la reforma agraria peruana, aún existen importantes lagunas en el conocimiento de su dinámica interna y sus efectos a largo plazo. El gobierno de Velasco llegó a su fin de forma abrupta en 1975, tras un golpe de Estado dirigido por uno de los miembros del propio gabinete velasquista. El régimen conservador del general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) revirtió muchas de las reformas del gobierno de Velasco y retiró el apoyo estatal a la reforma agraria.[18] El nuevo régimen tenía poco interés en preservar tanto la propia reforma como su historia, lo que tendió a eclipsar sus logros y a enfatizar sus fracasos.[19]

En la época de la reforma, el caso peruano llamó mucho la atención de los politólogos interesados en el reformismo militar y el desarrollo dirigido por el Estado, así como de los antropólogos y sociólogos deseosos de comprender el impacto de esta medida en la dinámica comunitaria y la política regional.[20] Los investigadores que analizaron la reforma agraria a escala local aportaron importantes conocimientos sobre los contextos

18. El brusco cambio de dirección política entre los regímenes de Velasco y Morales Bermúdez se pone de manifiesto en las entrevistas en profundidad de María del Pilar Tello con antiguos miembros de ambos gobiernos. Tello, *¿Golpe o revolución?*
19. En general, los economistas han concluido que la reforma agraria no tuvo un impacto positivo en el desempeño económico del Perú. Véase Álvarez, *Política agraria y estancamiento de la agricultura*; y Caballero, *Agricultura, reforma agraria y pobreza campesina*. Sin embargo, es importante señalar que el hecho de que esta reforma no mejorara la productividad se ha utilizado a menudo para apoyar el argumento de que nunca debió llevarse a cabo, a pesar de que el gobierno de Velasco presentó la reforma principalmente como un acto de justicia social y no como un plan para aumentar la productividad. Consúltese también Revesz, *Estado, algodón y productores agrarios*.
20. Chaplin, ed., *Peruvian Nationalism*; Cleaves y Scurrah, *Agriculture, Bureaucracy, and Military Government in Peru*; McClintock, *Peasant Cooperatives and Political*

# 1



## Historia de la cuestión de la tierra en el Perú

Aunque pasaron al primer plano de la política latinoamericana en el siglo XX, las luchas por la tierra se remontan a la época colonial. En los años inmediatamente posteriores a la invasión de 1532, la Corona española concedió a los primeros colonos encomiendas que les otorgaban derechos sobre el tributo y la mano de obra de los súbditos de ciertos caciques indígenas.[1] Sin embargo, como muestra Robert Keith, el sistema de encomienda se derrumbó unos treinta años después de la invasión española, debido al descenso masivo de la población indígena y al aumento simultáneo de la población colona y sus necesidades de consumo. El estudio de Keith sobre los valles de la costa central del Perú revela que, a finales del siglo XVI, la sociedad de conquista que vivía de los tributos de los productores indígenas había cambiado a una sociedad colonial, que participaba directamente en el proceso de producción.[2] La unidad productiva central de esta nueva sociedad colonial era la hacienda: una finca agrícola

---

1. Para los sistemas prehispánicos de reciprocidad y comercio, véase Bauer, *El desarrollo del Estado inca*; Harris, Larson y Tandeter, eds., *Ethnicity, Markets, and Migration in the Andes*; y Sammells, "Production, Trade, Reciprocity, and Markets".
2. Keith, *Conquest and Agrarian Change*.

que producía bienes que podían comercializarse en los mercados locales e internacionales. Con el surgimiento de la hacienda, la propiedad de la tierra pasó a ser mucho más significativa y disputada, ya que constituía la base de la riqueza de los colonos.[3]

## Los orígenes de la desigualdad de la tierra

Durante los siglos XVI y XVII, las tierras ocupadas por las comunidades indígenas (conocidas como *ayllus* en las tierras altas) fueron absorbidas cada vez más por las haciendas.[4] Según Keith, los métodos de adquisición de tierras diferían de una región a otra. Incluían el matrimonio (por ejemplo, con las hijas de los caciques locales), las subastas y las concesiones formales de tierras por parte del gobierno virreinal. No siempre se trataba de un despojo violento. Keith señala, por ejemplo, que la densidad de la población española en la costa central aumentó la demanda de tierras y, por tanto, mejoró la capacidad de los caciques indios para negociar su venta.[5] Sin embargo, el desalojo de las antiguas tierras comunales también se produjo por la desintegración y dislocación de las comunidades indígenas debido a las enfermedades, la ruptura política y la reorganización colonial de las poblaciones indígenas dispersas en reducciones, como parte de las reformas iniciadas por el virrey Francisco de Toledo en 1567.[6]

Las haciendas pudieron desarrollarse como empresas rentables, gracias al empleo de diferentes formas de trabajo: esclavos, asalariados y mano de obra tributaria. Sin embargo, a pesar del creciente dominio de las haciendas, el sistema de tributo comunal de las comunidades indígenas mantuvo una presencia importante, entre otros motivos porque estas comunidades constituían una valiosa fuente de mano de obra para las propias haciendas. La autosuficiencia de las comunidades permitía a los

---

3. Para una historia de las haciendas coloniales en el Perú, véase Cushner, *Lords of the Land;* Davies, *Landowners in Colonial Peru*; y Spalding, *Huarochiri*.
4. El término "ayllu" abarca en realidad una variedad de vínculos sociales, incluidos el parentesco, el territorio, la práctica religiosa, el uso de la lengua y la ocupación. Véase Sammells, "Production, Trade, Reciprocity, and Markets", p. 252.
5. Keith, *Conquest and Agrarian Change*, cap. 5.
6. Klarén, *Nación y sociedad en la historia del Perú*, pp. 88-99.

hacendados recurrir a la mano de obra servil cuando la necesitaban, sin asumir los costos de mantener una mano de obra permanente. Las minas también tenían un gran interés por preservar el acceso a la mano de obra indígena, y el Tesoro español seguía utilizando el tributo indígena como una importante fuente de ingresos. Por lo tanto, la Corona española permitió la titulación de tierras comunales, tanto para proteger a sus súbditos "indios" como para preservar las comunidades indígenas como recurso económico para el Imperio.[7]

Las limitadas protecciones otorgadas a las comunidades indígenas durante el régimen colonial se fueron retirando tras la independencia. Dejaron de existir jurídicamente y ya no podían ser reconocidas como propietarias de tierras: solo se reconocían los títulos de propiedad individuales. La élite criolla que asumió el control político de la república creía que la propiedad comunal de la tierra limitaba el desarrollo de la agricultura comercial y, por lo tanto, el desarrollo económico del país en su conjunto.[8] Se esgrimieron argumentos similares en todos los Estados independientes emergentes de América Latina.[9] En el Perú, la agricultura capitalista se volvió particularmente dominante después de 1840, gracias al capital derivado del auge del guano.[10]

Con la abolición oficial de la propiedad comunal, las haciendas fueron libres de acumular las antiguas tierras indígenas, ya fuera a través de transacciones comerciales o de ocupación compulsiva.[11] La pérdida de las

---

7. Matos Mar y Mejía, *La reforma agraria en el Perú*, p. 19.
8. Cumpa y Alfaro, *Capitalismo y formación regional*, p. 21.
9. Peloso y Tenenbaum, *Liberals, Politics, and Power*.
10. Piel, *El capitalismo agrario en el Perú*.
11. Varios autores han subrayado la importancia del siglo XIX, con la irrupción de las ideas liberales sobre la tierra y los cambios en la economía global, en la profundización de la desigualdad de acceso a la tierra. En el caso del Altiplano boliviano, Erwin Peter Grieshaber argumenta que la coexistencia hacienda-comunidad se mantuvo en equilibrio (en términos del tamaño de la tierra controlada) hasta finales del siglo XIX. En el Perú, el poder de los latifundistas se fortaleció considerablemente tras la guerra con Chile (1879-1883), al aumentar su participación en los mercados mundiales y la inversión extranjera y nacional en la agricultura y la minería de exportación. Según Heraclio Bonilla, esto condujo a "un asalto a las comunidades campesinas adyacentes". Véase Bonilla, "Comunidades de indígenas

tierras comunales empujó a las comunidades indígenas a las zonas menos favorecidas de la sierra y la costa. Al mismo tiempo, la obligación de pagar tributo a las autoridades provinciales hizo que las comunidades indígenas buscaran empleo en las haciendas, como una forma de obtener el dinero necesario.[12] Otros vivían en las haciendas como yanaconas: servidores a los que se les daba una porción de tierra para practicar la agricultura de subsistencia a cambio de un servicio personal al terrateniente.[13]

A medida que la presión demográfica y la escasez de tierras aumentaban durante el siglo XIX, surgieron diversas formas de trabajo semifeudal, sobre todo en las regiones del Altiplano donde se concentraban las comunidades indígenas.[14] La privatización de las antiguas tierras comunales también dio lugar a una nueva clase de pequeños propietarios o parceleros, que sobrevivían principalmente gracias a la agricultura de subsistencia.[15] Estos minifundios luchaban por competir con las haciendas, que a menudo podían controlar el acceso al agua y la comercialización de los productos agrícolas.

En esta tendencia más amplia, los métodos de producción y la estructura laboral de las haciendas variaban considerablemente según las condiciones sociales y económicas locales. En la costa norte, las grandes extensiones de tierra plana y de regadío y el fácil acceso a los puertos marítimos facilitaron el crecimiento de las plantaciones que producían cultivos de exportación, como el algodón y el azúcar. Al principio, estas grandes haciendas o latifundios recurrían a los esclavos negros como mano de

---

y Estado nación en el Perú"; Grieshaber, *Survival of Indian Communities in Nineteenth-Century Bolivia*. Para una investigación más reciente sobre esta tendencia en la región fronteriza del Altiplano entre Perú y Bolivia, consúltese Cottyn, "Renegotiating Communal Autonomy".

12. Contreras, *El centralismo peruano en su perspectiva histórica*.
13. Matos Mar, *Yanaconaje y reforma agraria en el Perú*.
14. La presencia de comunidades indígenas variaba sustancialmente a lo largo del Perú. En 1928, solo el 0,32% de estas comunidades se encontraba en el departamento de Lambayeque. La proporción de comunidades en el conjunto de los departamentos del norte equivalía al 12,23% del total, mientras que las comunidades indígenas de los departamentos del sur representaban el 73,24%. Véase Gómez Cumpa y Bazán Alfaro, *Capitalismo y formación regional*, p. 21.
15. Gómez Cumpa y Bazán Alfaro, *Capitalismo y formación regional*, p. 21.

obra, pero tras la manumisión de 1854, se valieron de trabajadores chinos no cualificados. A finales del siglo XIX había además una gran mano de obra migrante reclutada sobre todo entre las comunidades de la sierra.[16] En la sierra, el desarrollo capitalista se concentró en la minería y en los principales centros de producción ganadera, mientras que otras formas de agricultura continuaban abasteciendo los mercados locales y regionales y persistía la relación tradicional entre las haciendas y las comunidades indígenas. La tierra no era cultivada directamente por el hacendado, sino que se arrendaba a los campesinos para la producción agrícola a pequeña escala a cambio de servicios personales y de una renta pagada en efectivo, productos o mano de obra.[17]

Las regiones amazónicas eran diferentes. La baja proporción de tierra apta para la producción agrícola y la baja densidad de población hicieron prácticamente imposible transformar estas regiones en zonas de producción capitalista mediante el modelo de hacienda. En cambio, fueron el centro del auge del caucho (1870-1915) y más tarde se convirtieron en el foco de intentos esporádicos de colonización promovidos por el gobierno con campesinos andinos sin tierra.[18] Por esta razón, las regiones amazónicas no fueron incluidas en la reforma agraria de 1969, sino que fueron objeto de una legislación separada a través de la ley de comunidades nativas y promoción agrícola de las regiones de la selva de 1974.[19]

Durante la primera mitad del siglo XX, la expansión de las haciendas costeras avanzó rápidamente, a medida que los cultivos de exportación se integraban cada vez más en los mercados mundiales. Esta expansión capitalista estuvo acompañada de importantes inversiones extranjeras y de la adopción de modernos métodos de producción. La consolidación de la industria azucarera provocó la dislocación de las haciendas tradicionales y la concentración de la propiedad de la tierra en latifundios, a expensas de los pequeños propietarios y las comunidades indígenas. La desigualdad de la estructura agrícola latifundio-minifundio se hizo cada vez más

16. Klarén, *Formación de las haciendas azucareras.*
17. Matos Mar y Mejía, *La reforma agraria en el Perú*, p. 24.
18. Varese, "Social Justice and Cultural Rights in the Peruvian Amazon, pp. 60-79.
19. Matos Mar y Mejía, *La reforma agraria en el Perú*, p. 114.

extrema. Al mismo tiempo, la llegada masiva de trabajadores migrantes a las plantaciones de azúcar y algodón abrió el camino al activismo sindical, logrando en algunos casos notables mejoras en los salarios y las condiciones de trabajo.[20]

En la sierra sur, por el contrario, las haciendas tradicionales continuaron extendiendo su control territorial, desplazando a algunas comunidades indígenas a las zonas menos productivas y convirtiendo a otras en mano de obra cautiva para las haciendas.[21] Estas diferencias regionales se volverían extremadamente importantes a la hora de implementar la reforma agraria de 1969. Las condiciones sociales y económicas regionales determinaron qué tipo de empresa agrícola era posible y moldearon lo que la población esperaba de la reforma. Mientras que los campesinos de la sierra buscaban la devolución de sus tierras ancestrales (que a menudo habían perdido hacía relativamente poco tiempo por el avance de las haciendas), los trabajadores agrícolas de la costa estaban más preocupados por conseguir mejores remuneraciones y condiciones de trabajo. Por su parte, los movimientos campesinos, los partidos políticos y los sucesivos gobiernos también responderían a la llamada cuestión de la tierra a su manera.

## Respuestas a la cuestión de la tierra

### *Movimientos campesinos*

En su estudio sobre los movimientos campesinos peruanos a lo largo de los siglos XIX y XX, Wilfredo Kapsoli destaca el abanico de estrategias de protesta que los pobladores rurales utilizaron para combatir la falta de tierras, la servidumbre y los abusos a manos de los hacendados: peticiones, ocupaciones de tierras, huelgas, asaltos violentos a las haciendas, bandolerismo, etc.[22] Aunque según Kapsoli las protestas campesinas "se asemejan a las olas del mar o al caudal de los ríos andinos. Tienen sus altas

20. Klarén, *Formación de las haciendas azucareras.*
21. Matos Mar y Mejía, *La reforma agraria en el Perú*, p. 22.
22. Kapsoli, *Los movimientos campesinos en el Perú.*

y bajas, sus crecidas y retiros",[23] es posible establecer un punto de quiebre en torno a 1930. Antes de esa fecha, si bien a menudo se producían masacres violentas de campesinos, las protestas podían contenerse con relativa facilidad mediante el uso de la fuerza represiva.[24] Sin embargo, a partir de 1930 tanto la escala como la capacidad organizativa campesinas se incrementaron y las protestas se convirtieron en un verdadero desafío para los terratenientes.

Alberto Flores Galindo observa un proceso similar de expansión de los movimientos campesinos a lo largo del siglo XX, pero propone una división en tres momentos diferentes de activismo campesino: levantamientos y bandolerismo (1910-1925), invasiones de tierras campesinas y sindicalismo (1945-1965), y nuevos movimientos campesinos surgidos en el contexto de la reforma agraria (1969 en adelante).[25] Mientras que el primer periodo habría estado definido por protestas localizadas y de corta duración, que no obtuvieron el apoyo de otros grupos sociales, el segundo periodo se habría caracterizado por protestas de escala regional o nacional, bien organizadas. Durante este segundo periodo, las demandas de los campesinos se extendieron más allá de la tierra y abarcaron un conjunto más amplio de cuestiones sociales, como la educación y la mejora de las condiciones de trabajo, lo que permitió establecer alianzas con los movimientos estudiantiles y obreros. Flores Galindo hace hincapié en la intensificación del desarrollo capitalista como factor clave detrás de este cambio de la organización campesina: el crecimiento del trabajo asalariado, en lugar de (o en combinación con) los sistemas feudales, abrió el camino a un mayor poder de negociación, que a su vez se vio reforzado por la aparición de sindicatos y organizaciones campesinas, como la Confederación Campesina del Perú (CCP), fundada en 1947.[26]

23. Ibíd., p. 125.
24. Durante las protestas campesinas en la provincia de La Mar (Ayacucho) en 1923, por ejemplo, más de 60 campesinos fueron asesinados cuando desafiaron las demandas abusivas de los terratenientes. Ibíd., pp. 65-67.
25. Flores Galindo, "Movimientos campesinos en el Perú".
26. Ibíd.

A lo largo del siglo XX, las protestas campesinas tuvieron importantes singularidades regionales. En la sierra centro y sur, las tomas de tierras se impusieron como forma de protesta, mientras que los paros y los boicots eran más comunes en la economía de plantación de la costa norte. Como ha demostrado Peter Klarén, fue en los latifundios de la costa donde el APRA arraigó en primer lugar. Fundado en 1924, este partido desempeñó un importante papel como organizador de paros, boicots y levantamientos armados, a pesar de verse obligado con frecuencia a actuar en la clandestinidad por una serie de gobiernos autoritarios.[27] El proletariado de los complejos agroindustriales de la costa proporcionaba un terreno más fértil para la política partidista de masas que las haciendas tradicionales de la sierra central y del sur.

El desarrollo capitalista también creó tensiones en la ceja de selva del sur, en el borde oriental de los Andes. En particular, entre 1958 y 1963 la provincia de La Convención, en el departamento de Cusco, fue "el escenario del movimiento campesino más importante de ese periodo en el Perú, y probablemente en toda Sudamérica".[28] El historiador británico Eric Hobsbawm, quien le dedicó algunos trabajos, veía este movimiento como una consecuencia del neofeudalismo: a medida que el precio internacional del café crecía y las nuevas conexiones de transporte facilitaban el acceso a los mercados mundiales, los hacendados trataban de beneficiarse de estas oportunidades económicas utilizando las formas tradicionales de explotación feudal asociadas a la propiedad de la tierra. A corto plazo, esto les permitió reducir los costos al mínimo, al tiempo que ampliaban la producción para satisfacer la creciente demanda. Sin embargo, aunque los trabajadores migrantes (llamados localmente arrendires), atraídos por la posibilidad de adquirir tierras, aceptaron estas condiciones onerosas, pronto recurrieron a la organización colectiva para mejorar su situación. La tendencia de los terratenientes a rescindir el contrato de arrendamiento una vez que la tierra había sido mejorada y cultivada por los colonos fue una causa particular de descontento entre los campesinos.

27. Klarén, *Formación de las haciendas azucareras*, pp. 71-100.
28. Hobsbawm, "A Case of Neo-feudalism", p. 31. Traducción del inglés.

Hobsbawm señala que la propaganda y los activistas comunistas de Cusco estuvieron activos en la región desde la década de 1930.[29] Entre estos activistas destacaba el trotskista Hugo Blanco, una figura central en las protestas campesinas que recorrieron la sierra sur a principios de la década de 1960. En 1963, Quillabamba fue tomada por campesinos dirigidos por Blanco. Los campesinos procedieron a ocupar la hacienda Chaupimayo junto con otras de la provincia. Las tomas se extendieron rápidamente por los departamentos del sur y continuaron hasta marzo de 1964.[30] Los grupos movilizados incluían comunidades indígenas, arrendatarios y trabajadores de las haciendas, que exigían la devolución de las tierras ancestrales y la abolición de las condiciones de trabajo serviles.[31] La escala y la naturaleza coordinada de estas protestas las distinguían de los movimientos campesinos anteriores, lo que causaba un notable malestar entre las élites terratenientes. Temiendo una insurrección al estilo cubano, uno de los principales diarios de Lima, *La Prensa*, pidió una reforma agraria urgente para evitar que el movimiento creciera. Ante la magnitud de la movilización, una reforma agraria parecía ser una forma de contener la insurgencia más viable que la represión violenta utilizada en el pasado.[32]

### *Partidos políticos*

Durante las décadas de 1910 y 1920, las actividades de las primeras organizaciones indigenistas comenzaron a sensibilizar a la opinión pública sobre los abusos cometidos por los poderosos terratenientes. En un principio, las posibles soluciones apuntaban a mejoras legales y a una mayor oferta educativa para las comunidades indígenas. Sin embargo, en 1928 José Carlos Mariátegui reformuló el llamado "problema del indio" como una cuestión de distribución de la tierra. En sus populares y muy leídos *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*, comentaba: "Planteado

29. Ibíd., p. 45.
30. Para un relato detallado de las protestas en La Convención, véase Rojas, *La revolución de los arrendires*.
31. Neira, *Cusco: Tierra y muerte*.
32. "La reforma agraria es urgente", *La Prensa*, 9 de mayo de 1962.

así el problema agrario del Perú, no se presta a deformaciones equívocas. Aparece en toda su magnitud de problema económico-social —y por tanto político — del dominio de los hombres que actúan en este plano de hechos e ideas. Y resulta vano todo empeño de convertirlo, por ejemplo, en un problema técnico-agrícola del dominio de los agrónomos".[33] Mariátegui fundó lo que luego sería el Partido Comunista del Perú (PCP) y sus ideas seguirían siendo muy influyentes en la izquierda peruana durante décadas.

La reforma agraria también era una cuestión central para el APRA, que la veía como una forma de detener la extracción de riqueza por parte de los terratenientes extranjeros y de consolidar la agricultura como una industria nacional productiva. En lugar de eliminar el capital extranjero, el APRA pretendía controlarlo.[34] Esta postura atraía a los hacendados tradicionales que habían sido desplazados por el crecimiento masivo de las plantaciones de azúcar y algodón, una gran parte de las cuales eran de propiedad extranjera o estaban aliadas con inversores extranjeros. También atraía a quienes trabajaban para estas grandes empresas y se sentían insatisfechos con los salarios y las condiciones laborales. El discurso antiimperialista del APRA evocaba imágenes de la recuperación de la tierra peruana para los peruanos de una forma que atraía al proletariado sin tierra (aunque el partido seguía siendo evasivo sobre las perspectivas de redistribución).[35]

Obligado a la clandestinidad como resultado de la represión gubernamental durante las décadas de 1930 y 1940, el APRA concentró sus esfuerzos en desarrollar una base de apoyo entre los trabajadores de las plantaciones del norte. A medida que su papel como intermediario entre los trabajadores y los grandes terratenientes se hacía más fuerte, el partido se mostraba menos inclinado a desafiar la estructura de la propiedad, prefiriendo utilizar su poder de presión dentro del sistema existente.[36] De esta manera, a pesar de presentarse como un partido "revolucionario", el

33. Mariátegui, *7 ensayos*, p. 40.
34. North y Dos Santos, "Orígenes y crecimiento del partido aprista", p. 165.
35. Klarén, *Formación de las haciendas azucareras*.
36. Ibíd.

APRA se convertiría en una de las principales voces de oposición a la reforma agraria durante el primer gobierno de Belaunde (1963-1968). Su opinión era que solo debían expropiarse las fincas agrícolas "ineficientes", mientras que las haciendas industrializadas de la costa debían permanecer en manos de sus propietarios.

Junto con el APRA, el otro gran partido político que representaba los intereses de los grandes terratenientes era la Unión Nacional Odriista (UNO). Dirigida por el expresidente Manuel Odría, la UNO defendía a los exportadores agrícolas y a las empresas mineras internacionales, sectores que en aquel momento constituían la oligarquía peruana. A pesar de haber dirigido una severa represión contra el APRA mientras estaba en el cargo (1950-1956), durante el gobierno de Belaunde, Odría se alió con el APRA y mantuvo una oposición constante a las reformas propuestas por el régimen belaundista, particularmente la reforma agraria de 1963.[37]

Además de su influencia en los principales partidos políticos, los grandes terratenientes contaban con organizaciones propias para defender sus intereses, como la Sociedad Nacional Agraria y la Asociación de Criadores de Lanares del Perú. Los latifundistas también gozaban de estrechas relaciones con los principales periódicos y con una amplia gama de intereses financieros en otros sectores comerciales, lo que les daba una considerable influencia política a través de canales formales e informales.[38] Por ejemplo, la familia Gildemeister era la mayor productora de azúcar y arroz del país, y poseía un total de 32.213 hectáreas de tierras cultivadas, 105.131 de pastos en la costa y aproximadamente 420.000 hectáreas en la sierra. Fuera del sector agrícola, los Gildemeister tenían importantes participaciones en la producción de harina de pescado y aceite, así como en el mercado de seguros y en el periódico *La Prensa*.[39]

En el otro extremo del espectro político, el crecimiento de las protestas campesinas durante los años cincuenta y principios de los sesenta convenció a los radicales de izquierda de que el campo contenía un potencial revolucionario, posición reforzada por el triunfo de la Revolución cubana

---

37. Contreras y Cueto, *Historia del Perú contemporáneo*, pp. 314-324.
38. Malpica, *Los dueños del Perú*, p. 68.
39. Ibíd., pp. 92-96.

en 1959.[40] En 1965, dos partidos radicales de izquierda lanzaron una insurgencia guerrillera en la sierra central y meridional. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) se había formado como un movimiento disidente del APRA alrededor de 1959, tras la deriva del partido hacia la derecha.[41] El Ejército de Liberación Nacional (ELN) surgió al mismo tiempo entre miembros del Partido Comunista Peruano, que buscaban una alternativa radical a la dirección del partido aliada con los soviéticos. A pesar de compartir ciertos objetivos políticos, el MIR y el ELN trabajarían de forma independiente para promover la revolución en la sierra sur y central. Los guerrilleros tenían una serie de puntos débiles, entre ellos su escaso número y su desconocimiento de la zona, pues la mayoría procedían de Lima u otras ciudades de la costa. A finales de diciembre de 1965 habían sido derrotados por las Fuerzas Armadas, con gran pérdida de vidas.[42] Aunque no se vieron seriamente amenazadas por la insurgencia, la experiencia reforzó la decisión de las Fuerzas Armadas de lograr el desarrollo económico como una forma de evitar la revolución.[43]

*Legislación gubernamental*

Los esfuerzos parlamentarios para introducir la reforma agraria en el Perú comenzaron en la década de 1950, como respuesta tanto a las presiones políticas internas como a una tendencia internacional hacia la reforma agraria dirigida por el Estado. A finales de la década de 1950 se habían llevado a cabo importantes reformas agrarias en China, el bloque oriental y varios países latinoamericanos.[44] Aunque tuvieron circunstancias sociales y políticas diferentes, estas reformas se influyeron mutuamente y sirvieron de precedente para la legislación peruana. La reforma agraria contaba también con el respaldo explícito del gobierno de los Estados Unidos, que la veía como una forma de evitar la propagación de la revolución comunista.

40. Béjar, *Perú 1965*, pp. 46-59.
41. Kapsoli, *Los movimientos campesinos en el Perú*, p. 104.
42. Béjar, *Perú 1965*.
43. Caballero, "From Belaunde to Belaunde", p. 8.
44. Guardia Mayorga, *La reforma agraria en el Perú*, pp. 41-47.

Si la tierra se hubiera distribuido de forma más equitativa, se argumentaba, los cubanos no habrían apoyado el levantamiento de Fidel Castro. En 1961, el presidente John Kennedy creó la Alianza para el Progreso con el fin de estimular la cooperación económica entre Estados Unidos y América Latina. Entre los objetivos que acordaron los miembros de la Alianza estaba el compromiso de "fomentar, de acuerdo con las características de cada país, programas de reforma agraria integral".[45]

La primera gran iniciativa gubernamental de reforma agraria en el Perú surgió como respuesta a las crecientes protestas campesinas. En 1956, el presidente Manuel Prado creó la Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda (CRAV) para investigar las causas del malestar rural. Aunque la comisión identificó como punto clave la dinámica latifundio-minifundio, su informe puso mayor énfasis en la necesidad de colonizar nuevas áreas para la agricultura y mejorar la productividad. En general, se consideraba que las haciendas tradicionales de la sierra debían ser reformadas, mientras que los latifundios de la costa se consideraban modernos y eficientes, a pesar de la arraigada pobreza que se mantenía en ellos. Solo recomendó cambios menores en puntos como el yanaconaje.

José Matos Mar y José Manuel Mejía señalan que las soluciones propuestas por la CRAV reflejaban su sesgo hacia la agricultura capitalista de gran escala. Esto no era sorprendente dado que su director era Pedro Beltrán, un conocido empresario y terrateniente, miembro de la Sociedad Nacional Agraria y director de *La Prensa*.[46] Aunque las propuestas de la CRAV nunca se convirtieron en ley, la necesidad de una reforma agraria siguió siendo objeto de acalorados debates. Fue un tema clave en las elecciones generales de 1962, en las que todos los candidatos principales propusieron alguna modalidad de reforma agraria. Tras un resultado extremadamente ajustado y acusaciones de fraude electoral, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un golpe de Estado contra el presidente Prado. La junta militar, encabezada por los generales Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley López, anunció que actuaría como gobierno provisional y que las elecciones generales se celebrarían al año siguiente. La reforma agraria

45. Sklar y Hagen, comps., *Inter-American Relations*. Traducción del inglés.
46. Matos Mar y Mejía, *La reforma agraria en el Perú*, pp. 86-90.

en La Convención pasó a considerarse una prioridad y en noviembre de 1962 se promulgó la Ley de Bases para la Reforma Agraria. La norma incluía algunas de las propuestas de la CRAV, aunque se restringía a los valles de La Convención y Lares, y comenzó a aplicarse en marzo de 1963.[47]

La reforma agraria de Lindley contribuyó en cierta medida a atender las demandas de los movimientos campesinos de La Convención, pero estaba claro que la necesidad de reforma se extendía mucho más allá de esa provincia. En la campaña para las elecciones generales de 1963, el candidato de Acción Popular, Fernando Belaunde Terry, prometió una gran reforma agraria nacional y un mes después de asumir el mando presentó un proyecto de ley en ese sentido en el Parlamento.[48] Sin embargo, a pesar de la escalada de tomas de tierras en toda la sierra sur, el Congreso siguió mostrando un notable grado de inercia. Acción Popular no tenía mayoría parlamentaria y la alianza APRA-UNO bloqueó elementos clave del proyecto de ley.

La frustración del gobierno ante este bloqueo fue palpable. En un panfleto publicado poco después, el vicepresidente Edgardo Seoane Corral señalaba que

> Frente a la decisión del Gobierno, y a la decisión ya mostrada por los pueblos del Perú en invasiones a terrenos rústicos y urbanos producidas en la última década, un sector minoritario del país cierra los ojos ante nuestra realidad. Una vez más, la historia demuestra que las clases privilegiadas en el orden económico jamás han cedido ante las necesidades del bienestar general, la justicia y la razón.[49]

La reforma finalmente aprobada por el Congreso en mayo de 1964 (Ley n.° 15037) fue más allá de las propuestas anteriores, al incluir disposiciones para la expropiación de tierras en todos los tipos de unidades agrícolas y no solo en el sector tradicional. También tenía un alcance nacional, en contraste con la limitada reforma introducida por el general Lindley.

---

47. Ibíd., pp. 91-93.
48. Mayer, *Cuentos feos*, pp. 78-79.
49. Ministerio de Agricultura, *Exposición de la Oficina Nacional de Reforma y Promoción Agraria*, p. 1.

Sin embargo, ofrecía múltiples concesiones a los grandes terratenientes, entre ellas la posibilidad de parcelar la tierra de forma privada (permitiendo de hecho dividir una finca entre diferentes miembros de una misma familia), un sistema de afectación gradual que restringía la superficie total de tierra que podía ser expropiada y una exención para los complejos agroindustriales. Además, los propietarios podían eludir la reforma si demostraban la "eficiencia" de su explotación. Los procesos de expropiación y adjudicación eran extremadamente burocráticos, lo que ofrecía amplias oportunidades a los terratenientes para obstruir la ley.[50] Matos Mar y Mejía calculan que para 1968 solo el 2% de la población campesina necesitada de tierras se había beneficiado de la iniciativa de Belaunde.[51]

## La reforma agraria de 1969: motivaciones

Llevar a cabo una reforma agraria significativa fue una motivación clave para el golpe de Estado de 1968 dirigido por el general Juan Velasco Alvarado. Según Dirk Kruijt, el grupo de oficiales que rodeaba al futuro presidente era "reducido y relativamente cerrado".[52] Estaba formado por tres generales y once coroneles. Al igual que Velasco, todos ellos procedían de "familias de humilde condición que vivían en pequeñas ciudades de provincia o procedían de comunidades campesinas".[53] Todos ellos habían sido testigos o habían experimentado la pobreza rural y se sentían moralmente comprometidos con ella.

Más allá de las convicciones personales de los golpistas, la agenda política del gobierno se inspiraba en un cambio en la orientación política de las Fuerzas Armadas, que se había iniciado en la década de 1950. El Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), creado en 1950, alentaba a los oficiales a considerar cuestiones de desarrollo nacional y abogaba por su participación en la vida civil.[54] El CAEM reflejaba la tendencia presente en

50. Matos Mar y Mejía, *La reforma agraria en el Perú*, pp. 94-104.
51. Ibíd., p. 103.
52. Kruijt, *La revolución por decreto*, p. 94.
53. Ibíd., p. 97.
54. Stepan, *The State and Society*.

gran parte de la América Latina de la Guerra Fría a considerar las Fuerzas Armadas como un agente clave de modernización y contrainsurgencia, mediante una combinación de programas sociales y el desarrollo de tácticas militares especializadas para combatir a los grupos guerrilleros. Como comenta Cynthia McClintock,

> [...] el anticomunismo fue una premisa básica en las escuelas militares de la mayoría de las naciones latinoamericanas durante la posguerra y las escuelas militares del Perú no fueron una excepción. Una postura anticomunista intensa y visceral caracterizaba incluso a muchos oficiales que más tarde serían clasificados como progresistas.[55]

En los círculos intelectuales militares, el Partido Demócrata Cristiano, de centroizquierda, y el Movimiento Social Progresista (MSP) eran particularmente influyentes. Alberto Ruiz Eldredge, un abogado muy respetado y miembro del MSP (que más tarde se convirtió en una figura importante en el gobierno de Velasco) recordaba que varios miembros de esa organización fueron llamados a exponer en el CAEM y que muchas de las reformas del gobierno de Velasco reflejaban ideas propuestas por primera vez por ellos en las elecciones de 1962.[56] Dos simpatizantes del MSP, Benjamín Samanez Concha y Guillermo Figallo, desempeñaron un papel fundamental en la redacción de la Ley de Reforma Agraria.

La ley (Decreto Ley n.º 17716) fue redactada por una comisión especial que incluía al ministro de Agricultura y a cinco asesores. Los miembros de la comisión se basaron en el creciente conjunto de investigaciones sobre cuestiones rurales que habían surgido desde finales de los años cincuenta en los campos de la antropología, la sociología y la economía, así como en las experiencias anteriores de reforma agraria. Tanto los investigadores peruanos como los extranjeros habían abordado cuestiones como la naturaleza de las relaciones de poder en las comunidades rurales, las

55. McClintock, ""Velasco, funcionarios y ciudadanos: políticas de cautela", p. 305.

56. Alberto Ruiz Eldredge, entrevista inédita de María del Pilar Tello, realizada en Lima hacia 1981. Estoy en deuda con María del Pilar Tello por haberme permitido el acceso en Lima a las transcripciones inéditas de sus entrevistas con altas personalidades del gobierno de Velasco.

diferencias en los sistemas de tenencia de la tierra, los factores que determinaban la productividad agrícola y las perspectivas de cambio social.[57] Esta investigación continuaría desarrollándose a lo largo del proceso de reforma agraria, impulsada por un fuerte compromiso político con los problemas que afectaban al campo y la oportunidad inusualmente directa de contribuir a la política gubernamental.[58]

Según Samanez Concha, la propuesta inicial elaborada por la comisión de reforma agraria "era en gran parte copia de lo que fue la Ley 15037, promulgada por Belaunde, que dejaba intocado el latifundio y los complejos azucareros".[59] Después de que Figallo y él plantearan su preocupación de que no llegaba lo suficientemente lejos, se conformó una nueva comisión, esta vez supervisada por el general Leonidas Rodríguez Figueroa, del ala más progresista del gobierno militar. Samanez Concha describió los principios rectores de la ley de la siguiente manera: "Queríamos realizar una Reforma Agraria de tipo estructural, no una reforma convencional como la que propiciaba la Ley 15037 y como las que estaban en vigencia en otros países. Una ley avanzada que planteara una reforma agraria que pudiera ser masiva, rápida y drástica".[60] A diferencia de Bolivia, donde los planes para la reforma agraria de 1953 se desarrollaron en consulta con el gobierno de los Estados Unidos y se redujeron por temor a que retiraran su apoyo, la redacción del Decreto Ley n.° 17716 se llevó a cabo en el más estricto secreto. El gobierno de Velasco se mantuvo desafiante frente a las preocupaciones expresadas públicamente por el gobierno de los Estados Unidos en nombre de empresas estadounidenses, como Grace & Co., una de las principales productoras de azúcar del Perú.

---

57. Véase, por ejemplo de Bourricaud, *Cambios en Puno: estudios de sociología andina*, y de Matos Mar, *Las actuales comunidades de indígenas y Dominación y cambios en el Perú rural*.
58. Revesz, "Necesidad de una nueva interpretación de la reforma agraria y sus efectos", pp. 87-121.
59. Benjamín Samanez Concha, entrevista inédita de María del Pilar Tello realizada en Lima hacia 1981.
60. Ibíd.

## Los términos de la ley

La Ley de Reforma Agraria de 1969 tenía mucho en común con los programas de reforma agraria desarrollados en otras partes del mundo. El lema "la tierra para quien la trabaja" era compartido por casi todas las reformas de la época, desde la India hasta Yugoslavia. Pero también tenía elementos específicos, que definirían la naturaleza y el ritmo del cambio en el Perú. A diferencia de las reformas agrarias de México y Bolivia, donde se empezó a expropiar tierras después de recibir una petición formal por parte de algún individuo o comunidad, la reforma agraria peruana expropiaba tierras de acuerdo con las prioridades identificadas por los funcionarios del gobierno. Eso significaba que se podía implementar más rápidamente que las reformas anteriores y en condiciones favorables para el campesinado.[61]

El Decreto Ley n.° 17716 creaba una nueva unidad semiautónoma dentro del Ministerio de Agricultura para aplicar la reforma: la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural (DGRAAR). La administración local corría a cargo de las oficinas establecidas en cada zona de reforma agraria.[62] Una vez declarada una zona como parte de reforma agraria, se pedía a todos los propietarios de tierras de la zona que presentaran sus títulos de propiedad, para que los revisara la DGRAAR. Las tierras que excedían la superficie máxima que podía ser cultivada directamente por el propietario, conocida como el área inafectable, eran expropiadas según un calendario bastante rápido. Aunque las expropiaciones eran obligatorias, los propietarios recibían un pago por sus tierras en forma de bonos industriales y/o en efectivo, tras una evaluación detallada del valor de los predios por parte de los administradores gubernamentales.[63]

61. De la Peña, "Rural Mobilizations in Latin America Since c. 1920", pp. 459-460.

62. Las zonas de reforma agraria se crearon gradualmente en todo el país tras la aprobación del Decreto Ley n.° 17716, sobre la base de las zonas agrarias creadas por el Servicio de Investigación y Promoción Agraria en 1960 para promover el desarrollo agrícola. Estas mismas divisiones zonales fueron conservadas por el gobierno de Velasco por razones tanto pragmáticas como políticas. Véase Albertus, "Land Reform and Civil Conflict".

63. Los bonos de la reforma agraria se convirtieron más tarde en una cuestión política muy controvertida, ya que los sucesivos gobiernos se negaron a pagarlos. Véase Seoane, *La deuda secreta del Perú*.

Una vez completada la expropiación, la DGRAAR comenzaba el proceso de adjudicación. Justo en ese momento, los campesinos podían presentar argumentos para recibir las tierras expropiadas, por lo que era a menudo la parte más polémica de la reforma.[64] Las reclamaciones de tierras eran procesadas por los recién creados "jueces de tierras", que a su vez rendían cuentas a un tribunal agrario nacional. Este nuevo sistema de tribunales de tierras era en gran medida independiente de los tribunales civiles, que históricamente habían tendido a favorecer a los propietarios en detrimento del campesinado, y permitía las audiencias orales, incluido el uso del quechua.[65] Al recibir la tierra, los adjudicatarios se comprometían a pagarla en el transcurso de 20 años, dando lugar a lo que se conocería como "deuda agraria".

La principal forma de adjudicación de las tierras expropiadas eran las llamadas cooperativas agrarias de producción (CAP) y las sociedades agrícolas de interés social (SAIS). Las CAP estaban compuestas por trabajadores permanentes, por lo general los antiguos trabajadores de las haciendas, que se encargaban conjuntamente de la gestión de una sola finca. Las SAIS eran asociaciones más amplias, formadas por trabajadores de varias fincas vecinas y comunidades locales. Al extender la membresía de las SAIS a las comunidades situadas en las áreas circundantes a las haciendas expropiadas, el gobierno esperaba ampliar el impacto de la reforma y recompensar a las comunidades indígenas que habían sufrido la invasión de sus tierras.[66]

La membresía de las cooperativas se determinaba mediante indagaciones locales, que registraban a los beneficiarios potenciales en un área determinada. El problema era que, a menudo, las cooperativas no podían absorber a todos los trabajadores elegibles, dando lugar a una tensión considerable entre los campesinos sin tierra y los miembros de estas.[67] Aunque los derechos de propiedad de los indígenas estaban explícitamente

64. Seligmann, *Between Reform and Revolution*, pp. 93-104.
65. Ibíd., pp. 62-69.
66. Ibíd., p. 59.
67. Para la discusión de la diferenciación interna del campesinado creada por la reforma y el problema del subempleo en la región de Piura, véase Van der Ploeg, *El futuro robado*.

garantizados por el artículo 2 de la Ley de Reforma Agraria, esto solo se aplicaba a las tierras concedidas a las comunidades indígenas después de 1920.[68] En consecuencia, los comuneros se veían con frecuencia obligados a buscar el acceso a la tierra como miembros individuales de cooperativas o como un grupo de campesinos que acordaba formar una cooperativa, en lugar de basarse en reclamaciones de tierras ancestrales.[69]

Las comunidades indígenas que recibían tierras como resultado de la reforma eran rebautizadas como "comunidades campesinas". Este nuevo apelativo formaba parte del esfuerzo del gobierno militar por librar a la sociedad rural de lo que consideraba connotaciones racistas y discriminatorias asociadas con los términos "indígena" e "indio". Sin embargo, como argumenta Juan Martín Sánchez, esta imposición de una identidad campesina homogénea a una población caracterizada por una gran diversidad étnica y social tendió a producir sus propios patrones de exclusión y discriminación, como veremos con detalle en capítulos posteriores.[70]

Además de la vía de la cooperativa o de la comunidad campesina, los campesinos podían recibir tierras a título individual, en forma de unidad agrícola familiar. Sin embargo, el gobierno prefería el modelo asociativo por considerar que producía economías de escala y un uso más racional de los recursos. Este énfasis se refleja en el hecho de que el 65,3% del total de tierras adjudicadas por la reforma se destinó a las cooperativas, en lugar de a comunidades o a campesinos por separado.[71] Además, el artículo 92 declaraba que las cooperativas debían tener preferencia en la distribución del crédito agrícola.[72] En paralelo, a través del Estatuto Especial de las Comunidades Campesinas (aprobado en febrero de 1970), el régimen de

68. Decreto Ley n.° 17716, título 10, artículo 119.
69. Ibíd., título 6, artículo 77, y título 10, artículo 117.
70. Martín-Sánchez, "Indigenismo bifronte en el gobierno peruano de Velasco Alvarado".
71. Álvarez y Caballero, *Aspectos cuantitativos de la reforma agraria*, p. 25. Nótese que esta cifra se refiere a toda clase de tierras y no tiene en cuenta los diferentes tipos de suelo, riego, etc.
72. El Decreto Ley n.° 17716, título 7, artículo 91, establece: "El orden de prioridad será el siguiente: Cooperativas, Comunidades Campesinas, Sociedades Agrarias de

Velasco trató (en gran medida sin éxito) de "reorganizar" las comunidades campesinas para hacerlas más parecidas a las cooperativas.[73]

Esta preferencia por el modelo cooperativo no fue exclusiva de la reforma agraria peruana, ni tampoco se limitaba a la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. En una reciente tesis doctoral que rastrea la aparición y el desarrollo de las ideas sobre los sistemas cooperativos en los círculos intelectuales peruanos, Ying-Ying Chu señala que el modelo cooperativo europeo ejemplificado por la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale (Rochdale Society of Equitable Pioneers, establecida en Inglaterra en 1844) fue estudiado y reelaborado por los científicos sociales y los responsables de la formulación de políticas en el Tercer Mundo.[74] Quienes participaban en el campo emergente de los estudios campesinos estaban especialmente interesados en la productividad agrícola y en la relación entre los modos de producción y la conciencia política.

En América Latina, los ejemplos del ejido en el México de la década de 1930, la cooperativa agrícola en la Cuba posterior a la revolución y los asentamientos rurales chilenos durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y Salvador Allende (1970-1973) ilustran, tanto la diversidad de modelos cooperativos posibles como el gran atractivo que tenía el cooperativismo como principio organizativo. Según anota Chu, "la cooperativa contenía elementos significativos que muchos de los responsables políticos latinoamericanos de la posguerra y sus consejeros —sin importar si eran capitalistas, socialistas o comunistas— deseaban: economía de escala, productividad, movilización popular e integración".[75] Como se analizará en capítulos posteriores, las cooperativas tenían un papel vital en la visión de Velasco sobre la participación política de las masas, aunque la naturaleza y los límites precisos de esta participación se convertirían en una tensión constante durante su gobierno.

Si bien fue redactada por una comisión cerrada, la reforma agraria de 1969 experimentó diversas modificaciones en respuesta a las protestas

73. Sobre el impacto del proceso de reestructuración en las comunidades campesinas, véase Huayre, "Reforma agraria y comunidades campesinas".

74. Chu, "The Answer Was Cooperative".

75. Ibíd., p. 36. Traducción del inglés.

de los campesinos. Su aplicación también estuvo condicionada por los nuevos organismos gubernamentales encargados de explicar la reforma, generar apoyo y formar a las nuevas cooperativas. Los más importantes de estos organismos fueron el Centro Nacional de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria (Cencira) y el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (Sinamos), creados en 1971. Aunque el gobierno de Velasco rechazaba la idea de fundar un partido político para promover las reformas, ambas instancias acabaron trabajando de forma cada vez más partidista, en tanto asumieron en la práctica la tarea de contrarrestar la oposición política tanto de la izquierda como de la derecha.

### La oposición a la reforma

En comparación con países como Chile y Colombia, donde los terratenientes crearon sus propias organizaciones paramilitares para oponerse a la reforma agraria, la oposición conservadora en el Perú fue relativamente silenciosa. Cynthia McClintock atribuye este hecho a lo que denomina la "política del sigilo": el gobierno actuó de forma tan rápida e imprevisible que no dio tiempo a los terratenientes a organizar una respuesta.[76] La ocupación de un día para otro de los complejos agroindustriales del norte, inmediatamente después de la aprobación del Decreto Ley n.° 17716, es un ejemplo de esta estrategia. McClintock también señala que la forma en que se implementó la reforma dividió a los terratenientes, al comenzar con las fincas más grandes y luego proceder con las más pequeñas:

> Los medianos propietarios no salieron en defensa de los más grandes porque creían que solo la oligarquía se vería afectada. Más tarde, cuando los medianos terratenientes se vieron afectados, los más grandes ya se habían visto obligados a abandonar sus empresas y no tenían ningún incentivo para trabajar en favor de otros terratenientes.[77]

No obstante, las élites conservadoras siguieron teniendo una fuerte influencia política a través de la UNO de Manuel Odría y, como se verá en

76. McClintock, "Velasco, funcionarios y ciudadanos".
77. Ibíd., p. 310.

el capítulo 4, utilizaban con frecuencia los medios de comunicación para criticar al gobierno. North y Korovkin señalan que parte de la fuerza de la oposición de derecha residía en su sutileza:

> Como toda buena propaganda, apelaba al "sentido común" y, por lo tanto, era accesible a un público masivo. No hay que subestimar la inteligencia de esta campaña y su impacto en la clase media y en los oficiales en el poder, ya que en la arena del debate ideológico político la derecha dominó con su discurso alternativamente amedrentador y razonable.[78]

Además, un gran número de los agrónomos e ingenieros a los que la administración de la reforma agraria recurrió por sus conocimientos técnicos procedían de entornos terratenientes y a veces utilizaban su posición para socavar la reforma desde dentro.

Otra fuente de oposición conservadora era el APRA. Como se ha señalado, a pesar de pretender ser un partido revolucionario de masas, el APRA se resistía a cualquier cambio que pudiera perjudicar los intereses de los barones del azúcar y el algodón de la costa norte, con los que tenía importantes alianzas. El partido también estaba ansioso por mantener su posición de liderazgo en los sindicatos agrícolas, por lo que vio las nuevas cooperativas como una invasión de su territorio. La suspensión de las elecciones locales y el cierre del Congreso durante los gobiernos de Velasco y Morales Bermúdez limitaban la capacidad del APRA de oponerse públicamente a las reformas, pero tenía una fuerte presencia en el aparato estatal, donde trabajaban numerosos miembros y simpatizantes del partido. Las tensiones políticas que surgieron en la burocracia estatal durante la implementación de la reforma agraria son, precisamente, un tema central de este libro.

En la izquierda, el gobierno de Velasco recibió el respaldo del PCP. El líder del partido, Jorge del Prado, adoptó una posición de "apoyo crítico" al gobierno militar, argumentando que sus elementos progresistas debían ser alentados, a pesar de su carácter mayoritariamente "burgués"

78. North y Korovkin, *The Peruvian Revolution and the Officers in Power*, p. 90. Traducción del inglés.

y "reformista".[79] Sin embargo, otros grupos de izquierda más pequeños criticaron abiertamente al gobierno. Tras la ruptura chino-soviética de 1964, varias facciones diferentes se separaron del PCP, cada una de las cuales pretendía ser el verdadero Partido Comunista del Perú. Las más importantes eran el Partido Comunista del Perú-Patria Roja y el Partido Comunista del Perú-Bandera Roja.[80] Ambas agrupaciones tenían una orientación maoísta, apostaban por una alianza obrero-campesina y hacían campaña en favor de una "verdadera revolución" y en contra de las reformas velasquistas.[81]

Además de los grupos maoístas, el gobierno se enfrentaba por el lado izquierdo a la oposición del MIR, uno de los dos partidos que habían lanzado sin éxito la guerra de guerrillas en 1965, y de Vanguardia Revolucionaria, agrupación fundada en 1965 por activistas de diversos orígenes como parte de la "nueva izquierda" que se gestaba en toda América Latina en aquella época. Ambas organizaciones contaban con una pequeña base de miembros y a menudo funcionaban como asociaciones flexibles, más que como partidos políticos tradicionales.[82]

La principal fuerza política de las organizaciones de izquierda radical procedía de las alianzas que establecían con los sindicatos y las organizaciones campesinas. Por ejemplo, Vanguardia Revolucionaria tenía fuertes vínculos con la CCP y los utilizaba para movilizar la oposición campesina al gobierno.[83] En 1974, este partido desempeñó un papel clave en las protestas campesinas y las tomas de tierra que tuvieron lugar en Andahuaylas, provocando una importante crisis política y obligando al gobierno a

---

79. Jorge del Prado, discurso ante la Conferencia Internacional de Partidos Comunistas y Trabajadores, Moscú, 5-17 de junio de 1969, disponible en: <https://www.marxists.org/espanol/delprado/1969/junio/17.htm>.

80. El Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, que más tarde iniciaría la guerra contra el Estado en 1980, también surgió durante este periodo; sin embargo, no atrajo apenas atención hasta la década de 1970. Incluso entonces, la Policía y las autoridades gubernamentales lo consideraban una facción menor de poca importancia. Véase Letts, *La izquierda peruana*.

81. Dorais, *La crítica maoísta peruana*.

82. Armando Zapata, entrevista realizada por la autora en Piura, 16 de abril de 2013.

83. Letts, *La izquierda peruana*.

negociar directamente con los campesinos. El PCP-Bandera Roja, por su parte, controlaba el principal sindicato de maestros y se convirtió en una poderosa voz de oposición durante el régimen de Velasco.[84]

Esta oposición de izquierda al gobierno de Velasco se debía a la desconfianza que los militantes más radicales sentían por las motivaciones de los militares, al desacuerdo ideológico con su enfoque reformista y a la frustración por la lentitud con la que, desde su punto de vista, se aplicaban las reformas. Las críticas a la reforma agraria se referían a aspectos como el compromiso de compensar a los terratenientes por sus tierras, la creación de cooperativas (consideradas como una estrategia para suplantar a las asociaciones ya existentes y para establecer formas de control autoritario del campesinado) y la marginación de las reivindicaciones indígenas sobre la tierra. Grupos como el PCP-Bandera Roja y Vanguardia Revolucionaria acusaban al gobierno de Velasco de llevar a cabo una reforma agraria procapitalista, impulsada por las exigencias del "imperialismo estadounidense".[85] Argumentaban que, al mejorar en algo la situación social, las reformas del gobierno retrasaban la verdadera revolución socialista, que estos partidos consideraban inevitable y necesaria.[86]

El presidente Velasco describía su actitud hacia el comunismo como un desacuerdo tolerante, más que como una oposición directa: argumentaba que los sistemas comunistas que había en China, la Unión Soviética y Cuba eran inapropiados para el contexto peruano y, en su lugar, propugnaba una "tercera vía" que no fuera ni comunista ni capitalista. En su mensaje a la nación de 1973 sostuvo que "rechazamos el comunismo, no desde una posición conservadora de la derecha, sino desde una posición revolucionaria de la izquierda nacional y autónoma". Esta oposición le llevaba a descartar a la "izquierda dogmática", que en público consideraba como una serie de grupos minoritarios insignificantes.[87] Sin embargo, en

84. Dorais, *La crítica maoísta peruana*.
85. Vanguardia Revolucionaria, "Aplastemos a los hacendados".
86. Dorais, *La crítica maoísta peruana*.
87. Velasco Alvarado, "Mensaje a la nación del Presidente del Perú, General de División EP Juan Velasco Alvarado, el 28 de julio de 1973", disponible en: <https://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/mensajes/mensaje_nacion_congreso_28_julio_1973>.

el ámbito interno, el gobierno estaba muy preocupado por la amenaza comunista. En 1975, el Sinamos elaboró una serie de guías políticas para su personal, una de las cuales, titulada "Grupos maoístas", decía:

> Consideramos que es importante para los militantes del Proceso Revolucionario Peruano [...] conocer las posiciones de estos grupos maoístas, a fin de poder competir política e ideológicamente con ellos dentro de las organizaciones populares y orientar su acción de acuerdo con las Bases Ideológicas de la Revolución Peruana.[88]

El hecho de que el personal del gobierno fuera descrito como "militante" da una idea del intenso clima político que rodeaba la reforma agraria. Aunque cada grupo propugnaba un modelo de cambio social diferente para las zonas rurales, como veremos más adelante, tanto los organismos gubernamentales como la izquierda radical consideraban que la "concientización" a través de la educación y la organización política era fundamental para llevar a cabo esta transformación.

## Conclusión

Desde la consolidación del sistema de haciendas durante el dominio colonial español, la tensión central en la cuestión de la tierra enfrentaba en el Perú a las grandes haciendas y las comunidades indígenas, ya que las primeras invadían con frecuencia las tierras de las segundas. Las reclamaciones de tierras indígenas se debilitaron aún más en el siglo XIX, por el cambio hacia la economía liberal, y en el siglo XX, por la expansión de los latifundios al servicio de los mercados capitalistas globales. Las comunidades indígenas se vieron obligadas con frecuencia a trasladarse a tierras de menor calidad, y la desigualdad de la estructura agrícola latifundio-minifundio se hizo cada vez más extrema.

La reforma agraria era una prioridad para el gobierno de Velasco. Las protestas campesinas, la amenaza de la insurgencia rural y los precedentes internacionales contribuían a una creciente conciencia sobre la

88. Cenpla/Sinamos, *Grupos maoístas*, p. 9.

necesidad de una reforma. En este contexto, la reforma agraria de 1969 se caracterizaba por la voluntad del gobierno de Velasco de realizar cambios fundamentales en la estructura social. Mientras que las reformas de los gobiernos de Lindley y Belaunde pretendían apaciguar los levantamientos campesinos y dejaban intactas las plantaciones costeras, la reforma agraria de Velasco se enfrentaba abiertamente con la oligarquía y buscaba remodelar la sociedad según un sistema de propiedad cooperativa.

Dadas las profundas raíces históricas de la desigualdad de la tierra, el éxito de la reforma del gobierno dependería de su capacidad para transformar tanto las relaciones de propiedad como las actitudes sociales. La experiencia del gobierno de Belaunde, cuya reforma agraria de 1964 había sido socavada por la oposición conservadora, sugería que una real transformación no podía lograrse solo con debates parlamentarios. Se necesitaba un programa sostenido de educación, organización política y comunicación de masas que ayudara a superar tanto la resistencia conservadora como la oposición de la izquierda radical, y que sirviera para impulsar la participación política y la identidad nacional.

# El terrorismo en el Perú

## Perú

## Temas de sociedad contemporánea



UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

# Índice



UTEC

# 1 Terrorismo en el Perú

# Recordemos...

"En la sierra, la salida de los "señores" de la tierra dejó a las sociedades rurales descabezadas socialmente y sin nadie que ocupara su lugar ni reactivara la producción. La pobreza alcanzó ahí niveles que la difusión de la radio y la televisión volvía más clamorosos y evidentes. Era la agonía por consunción de una civilización rural que, fundada allá en el siglo XVI, no había recibido mayores cambios que el de la desaparición de las haciendas. A pesar de que su contraparte histórica había sido eliminada, las comunidades indígenas sobrevivían como organizaciones de supervivencia y relictos culturales."

(Contreras y Cueto 2018: 390)

UTEC

# Chuschi, Ayacucho
## 17-5-1980

"En la mañana del 18 de mayo de 1980, el pueblo de Chuschi amaneció con dos manchas de tierra quemada: una en la plaza de armas, frente a la iglesia y el municipio, y otra cerca al puente de Quispillaqta. En ambas humeaban los restos de ánforas y padrones electorales. La historia oficial cuenta que durante la noche anterior, un grupo de encapuchados maniató a Florencio Conde, en ese momento registrador electoral, y robó y quemó el material que iba a servir para las presidenciales de ese año."

IDEELE (2016)

Morales, ¿Voto por el APRA?

CAOS EN EL INTERIOR DEL PAIS

### Queman cédulas, ánforas y padrones en Ayacucho

La mala organización del proceso electoral ocasionó serias fallas en la votación, especialmente en lugares apartados del interior del país. Ataques criminales también provocaron contratiempos de consideración.

Todo el material electoral: cédulas, credenciales, ánforas, sobres, sellos, tinta y padrones enviados a la localidad de Chuschi, en Ayacucho fueron quemados por elementos desconocidos que asaltaron las oficinas del Poder Electoral.

Las autoridades electorales de Lima tuvieron que fletar un avión militar para reponer el material. Esa nave llegó hasta Ayacucho a eso de las dos de la tarde. Un helicóptero militar que esperaba en esa ciudad trasladó el envío a Chuschi, distante 40 kilómetros esperándose que haya llegado a tiempo para que sufraguen los dos mil votantes de esa pequeña repartición.

Desde Iquitos se informó que en la propia ciudad, las mesas para analfabetos no pudieron funcionar sino hasta bien entrado el mediodía, debido a que los responsables de las mesas simplemente no acudieron. El Jurado Departamental, tuvo que suplir las ausencias desesperadamente.

Se indicó asimismo que a distintos puntos de la selva, como Caballococha, Rondina Pevas y Oran, a lo largo del río Amazonas, sencillamente no llegó el material electoral y los sufragantes aunque pocos, no pudieron votar.

Las autoridades electorales de Iquitos estimaron que unos 5 mil electores transeúntes se quedaron sin votar.

De otro lado, las autoridades electorales de Lima admitieron ayer, que los problemas que se presentaron ayer en los departamentos de Amazonas e Ica, no han podido ser solucionados.

En Amazonas, todo el material electoral fue distribuido prácticamente sin protección policial y militar. El proceso electoral se realizó sin garantías de seguridad. Las autoridades dijeron que lo único que podían hacer, era comunicar la situación a sus similares policiales y militares.

Dijeron que no se explican cómo es que no llegaron a Ica las credenciales para los miembros de mesa y tampoco, la equivocación en las listas de responsables de mesas en Trujillo. Señalaron que eso es responsabilidad de las autoridades de esa jurisdicción.

# Chuschi, Ayacucho
## 17-5-1980

- Atentado con la expresión democrática fundamental.
- Se inicia en un pueblo donde se realizaba un proceso de sufragio nacional por primera vez
- El atentado es confundido, minimizado como ataques de vándalos o “contratiempos de consideración”



*Atentado Chushi, Ayacucho. 1980. FOTO: Revista Idehpucp*

El año 1978 los militares permiten la transición a la democracia a través de una asamblea constituyente, la cual incorpora el sufragio universal a la nueva Constitución Política de 1979.

Para la década de 1980, con la vuelta a la democracia, el sistema de partidos reemerge bajo las nuevas condiciones institucionales del sufragio universal y la apertura de las elecciones municipales. Esto abre una nueva etapa en el desarrollo de conflictos electorales violentos, ya que nuevos escenarios locales —específicamente los distritos y la micropolítica local— se convierten en terreno de contienda.

A esto se debe sumar el accionar de Sendero Luminoso y la guerra terrorista iniciada por esta agrupación en 1980, por medio de un acto que precisamente ocurre en un escenario electoral: la quema de ánforas en el distrito de Chuschi durante las elecciones generales de 1980. Se puede decir que los procesos electorales post sufragio universal en el Perú, nacen bajo este signo de la violencia.

(ONPE 2016: 30)

UTEC

# Los hechos:

- Conflicto más grande que ha tenido el Perú: mayor duración, más impactos sobre el territorio y mayores costos humanos y económicos.

Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR):

- Los muertos y/o desaparecidos estimados en todo el país fueron 69,280 personas. Se estima que solo en Ayacucho la cifra fue de 26,000 personas.
- El 75% de las víctimas eran quechua hablantes e iletrados.
- La violencia impactó desigualmente en las diferentes regiones del país.

# Los escenarios:

La violencia se desarrolló de diferente manera en los distintos espacios regionales del país.

La intensidad estuvo determinada por las características del territorio y su población:

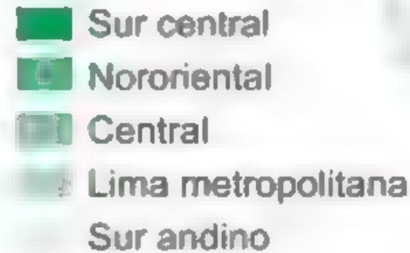
- En las **áreas rurales pobres** hubo mayor presencia subversiva por la baja densidad poblacional, el asentamiento disperso y las malas comunicaciones.
- **Ciudades urbanas** no hubo un dominio territorial sino asedio y acciones de terror.
- La **región amazónica** era un espacio complicado por los vínculos con el narcotráfico.
- https://youtu.be/GJ3CnNhyadw



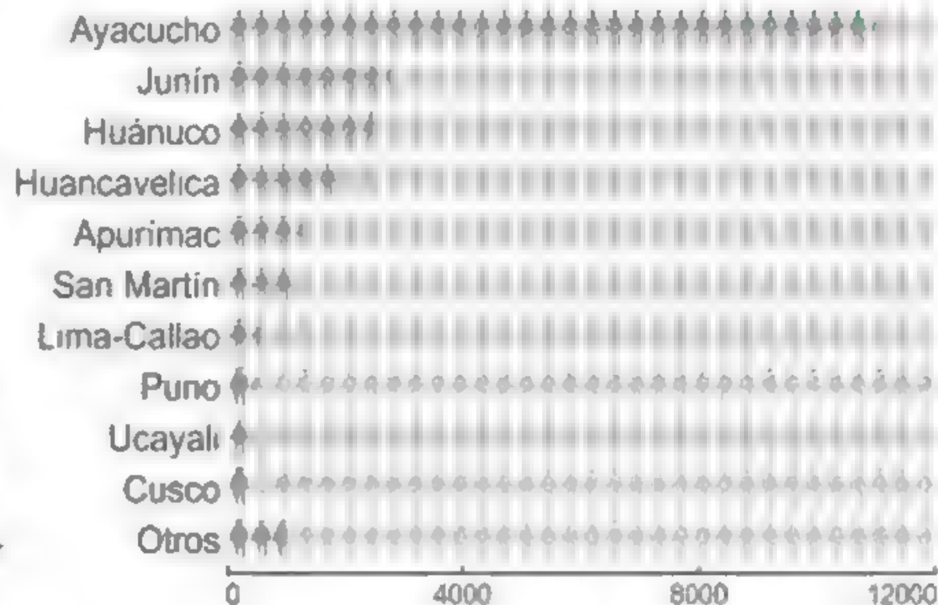
# Regionalización del horror

Regiones que fueron objeto de estudios específicos de la CVR, por su alta incidencia de acciones violentas:

- **La región Sur Central**, es donde se inició, con una violencia hasta entonces desconocida, el conflicto armado interno y donde cobró la mayor cantidad de víctimas.
- **En la región Nororiental** el conflicto armado se prolongó por más tiempo, se cruzó con otras fuentes de violencia y registró un gran número de víctimas.
- **La región Central**, entre Ayacucho y Lima, es estratégica para el abastecimiento y las comunicaciones de la capital, generadora y transmisora de energía, y asentamiento de empresas mineras; funcionó también como refugio en la zona de selva.
- **Lima Metropolitana**, fue el espacio de planificación nacional de la violencia y de repercusión mediática.
- **En el Sur Andino** se produjo la mayor destrucción de infraestructura.




Muertos y desaparecidos según departamentos:





Velorio de Luis Sulca Mendoza, alumno del colegio secundario General Córdova de Vilcashuamán, Ayacucho, que fue acusado de traición y luego asesinado por miembros de Sendero Luminoso el 26 de octubre de 1986.
Foto: Jorge Ochoa. Diario La República.
PUCP 2015:34

UTEC

- Era evidente que la histórica **brecha social, cultural y económica** que fracturaba al país, explicaba el contexto en que se desplegó la violencia
- La forma en que fue ejercida implicó **matanzas colectivas, secuestros y violaciones sexuales** de centenares de mujeres, hombres y niños.
- La **invisibilización inicial y dificultad organizativa de las víctimas** hizo que el conflicto recrudeciera rápidamente en los espacios rurales

# Los grupos terroristas de la época:

- El Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP – SL)





- Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)





# Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP – SL)

- Organización subversiva y terrorista que desencadenó una guerra contra el Estado y la sociedad.
- Desarrolló un **proyecto ideológico** y armado de tendencia ideológica marxista-leninista-maoísta. Con énfasis en esta última, y además, radicalizándola. El resultado: el pensamiento Gonzalo.
- Buscaban reemplazar el **control de la burguesía** por un régimen revolucionario campesino comunista
- Esto se lograría a través de una guerra total (que comprendía, hacia el final, **la guerra del campo a la ciudad** y la revolución cultural)



# El MRTA

- El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) surge en 1984.
- Se denominó como un “Ejército guerrillero”, y buscó diferenciarse de Sendero Luminoso.
- Las modalidades de sus acciones violentas: asesinatos, secuestros a líderes y toma de rehenes.
- Tradición ideológica: guerrillas latinoamericanas para conquistar el poder.





# *PCP-SL*

- La cabeza de SL fue **Abimael Guzmán Reynoso** o "Presidente Gonzalo", y fue un profesor de filosofía de la UNSCH
- Guzmán utilizó el entorno académico y espacio en universitario para la captación de una primera generación de estudiantes afines a la ideología maoísta, los cuales fueron utilizados para ampliar posteriores redes de captación en los espacios rurales del sur y centro del Perú.
- Había viajado a China en el contexto de la dictadura, y encontraba similitudes entre China y Perú.

# Marco temporal

- El inicio de la violencia armada (mayo de 1980 - diciembre de 1982): comprende desde el primer acto de violencia cometido por el PCP-SL en Chuschi, Cangallo, el 17 de mayo de 1980 hasta la disposición presidencial del 29 de diciembre de 1982 que estableció el ingreso de las Fuerzas Armadas en la lucha contrasubversiva en Ayacucho.
- La militarización del conflicto (enero de 1983 - junio de 1986): abarca desde la instalación, el 1 de enero de 1983 del comando político-militar de Ayacucho a cargo del general Roberto Clemente Noel Moral, hasta la matanza de los penales del 18 y 19 de junio de 1986.
- El despliegue nacional de la violencia (junio de 1986 - marzo de 1989): se desarrolla desde la mencionada matanza de los penales de junio de 1986 hasta el 27 de marzo de 1989, fecha del ataque senderista, con el apoyo de narcotraficantes, al puesto policial de Uchiza en el departamento de San Martín.
- La crisis extrema, ofensiva subversiva y contraofensiva estatal (marzo de 1989 - septiembre de 1992): se inicia inmediatamente después del asalto senderista al puesto de Uchiza y concluye el 12 de septiembre de 1992 con

Periodo del conflicto

Hechos previos al inicio de la violencia

La militarización del conflicto

Declive de la acción subversiva

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

El inicio de la lucha armada

El despliegue nacional de la violencia

Post conflicto

Periodo gubernamental

Dictadura Militar

Alan García

Alberto Fujimori

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Fernando Belaunde

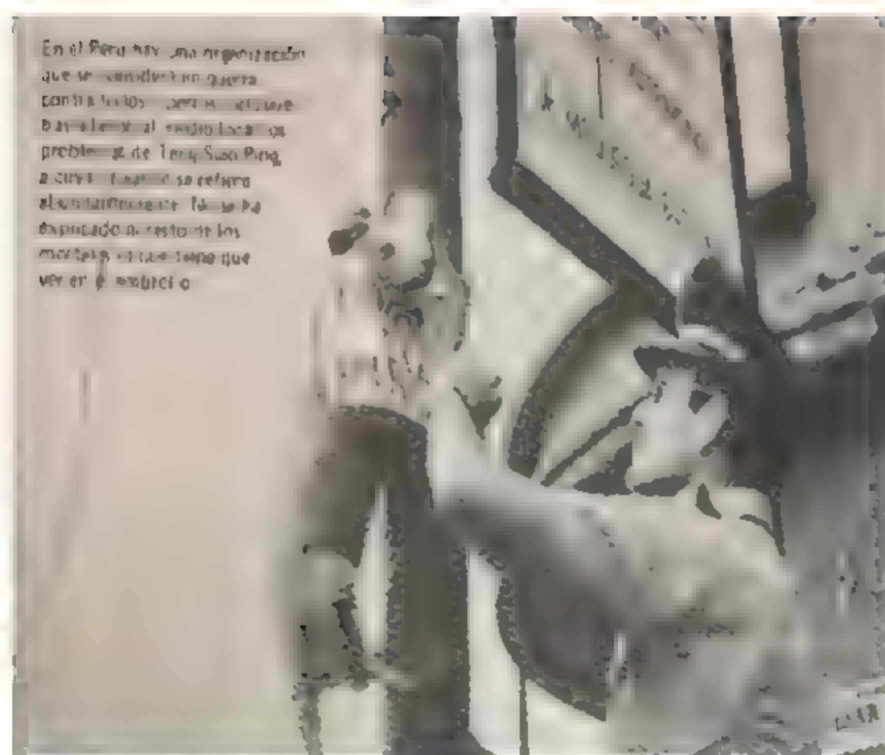
Alberto Fujimori

Línea cronológica del Centro de Documentación e investigación del LUM: https://lum.cultura.pe/cdi/lineatiempo/gubernamental?pb=18527

# El inicio de la violencia armada

## 1980





**mayo 17**

Integrantes de Sendero Luminoso queman 11 ánforas electorales en la localidad de Chuschi. Ayacucho.

**junio 13**

Manifestantes provocan un incendio en la Municipalidad de San Martín de Porres. Lima. dejando volantes que saludan el inicio de la "lucha armada". (1)

**julio 28**

Fernando Belaunde asume la Presidencia de la República por segunda vez.

**diciembre 26**

En las calles del centro de Lima. aparecen perros muertos colgados de los postes de alumbrado público. con el cartel: "Teng Hsiao Ping. hijo de perra". (2)

# La militarización del conflicto

29 de diciembre de 1982 - 19 de junio de 1986

Se inicia con las primeras acciones antisubversivas bajo la conducción de las Fuerzas Armadas y concluye con la matanza de los penales producida el 18 y 19 de junio de 1986.

https://youtu.be/zMSpPe4Tx5k





# Los espacios rurales

- Gran parte del país, sobre todo en zonas rurales, vivió asolada entre dos fuegos:
- El dogmatismo terrorista de Sendero Luminoso y la excesiva violencia contra subversiva del Estado y sus fuerzas armadas sin clara identificación de la amenaza.
- Se da un **proceso de estigmatización del campesinado y sociedades rurales** en general, agudizando aun más la violencia contra los grupos afectados



Las historias regionales analizadas por la CVR muestran que el éxito en la inserción rural de la principal fuerza subversiva, el PCP-SL, se produjo en los espacios rurales de población campesina muy pobre —mal vinculada al mercado— donde la Reforma Agraria no había tenido prácticamente nada que redistribuir y no había implicado un cambio significativo debido a la pobreza de sus recursos; o donde la estrategia empresarial de la Reforma había reproducido la marginación de las comunidades campesinas y creado nuevos ámbitos de conflicto irresuelto.

- Más de la mitad de las víctimas fueron causadas por el PCP-SL
- 3 de cada 4 de estas eran personas campesinas y quechua hablantes
- El mayor porcentaje de muertos y desaparecidos ocurrió en Ayacucho, Junín, Huánuco y Huancavelica, que a la vez eran los cinco departamentos más pobres del Perú.



# Los ataques en Lima

Lima Metropolitana fue también la sede de la principal instalación industrial del país y de su mayor población obrera. Fue, igualmente, el destino de la gran emigración rural, la depositaria de las esperanzas y, luego, de las frustraciones de millones de peruanos pobres que abandonaron sus comunidades de origen. De este modo, además de ser un lugar de asedio externo por su visibilidad, fue uno de los espacios de intensa agitación y proselitismo subversivo en sus asentamientos populares periféricos. Captar a una población obrera —el sujeto de la revolución en la ideología comunista— y a los habitantes de los «cinturones de pobreza» que rodean el centro del poder nacional fue un objetivo político y militarmente estratégico de los grupos alzados en armas.



# Los ataques en Lima

## Atentado en Tarata

Los datos claves para conocer esta tragedia.




RPP NOTICIAS

Fuente: RPP / Capital / CVR   Getty Images   Periodismo Gráfico Audiovisual

## LOS CRÍMENES PERPETRADOS

Desaparecido
Desaparición Forzada
Desplazamiento Forzoso
Detención Arbitraria
Fallecimiento
Familiar de desaparecido
Familiar de fallecido
Hijo/a producto de la violación sexual
Indebidamente Requisitoriado
Indocumentado
Lesiones
Lesiones graves
Menor Integrante del CAD
Prisión siendo Inocente
Reclutamiento Forzado
Secuestro
Tortura
Víctimas con Discapacidad
Víctimas Heridas o Lesionadas





Criterios de búsqueda de afectaciones personales del Centro de Documentación e Investigación del LUM:
https://lum.cultura.pe/cdi/lineatiempo/gubernamental?pb=18527

# Lima como Perú

*Entonces, mi pueblo era pues un pueblo, no sé... un pueblo ajeno dentro del Perú.*

Entre los miles de testimonios recopilados por la CVR, es común encontrar frases que dan cuenta del sentimiento de exclusión e indiferencia que experimentaron las personas y comunidades que fueron las víctimas mayoritarias del conflicto armado interno. Muchos de ellos sintieron que para el resto del país, en especial para los principales centros del poder político y económico, lo ocurrido en sus pueblos, casas y familias sucedía en «otro país».

Durante muchos años, el Perú moderno, urbano y limeño, trató con indiferencia a las regiones más afectadas por la violencia, las más alejadas y pobres. Incluso cuando el conflicto armado arremetió con fuerza en el corazón de las principales ciudades a finales de la década del 80 e inicios de la del 90, fue difícil unificar las experiencias y la memoria de la violencia de mundos tan distintos, a un punto tal

UTEC

# La captura

En 1990, aun en el gobierno de García se crea el GEIN, dentro de la DIRCOTE

Era una división de inteligencia de la policía cuya misión era capturar a la cúpula senderista.

Aun en 1992, no se conocía quienes eran los mandos de SL por completo. Por ello, realizaron investigaciones para identificarlos, al mando de Ketin Vidal y el comandante Miyashiro.

Mantuvieron un estricto secreto acerca de sus operaciones, pues ya había mucha competencia entre unidades.

El 12 de setiembre 1992 capturan a Abimael Guzmán y otros integrantes de la cúpula senderista en Surco.

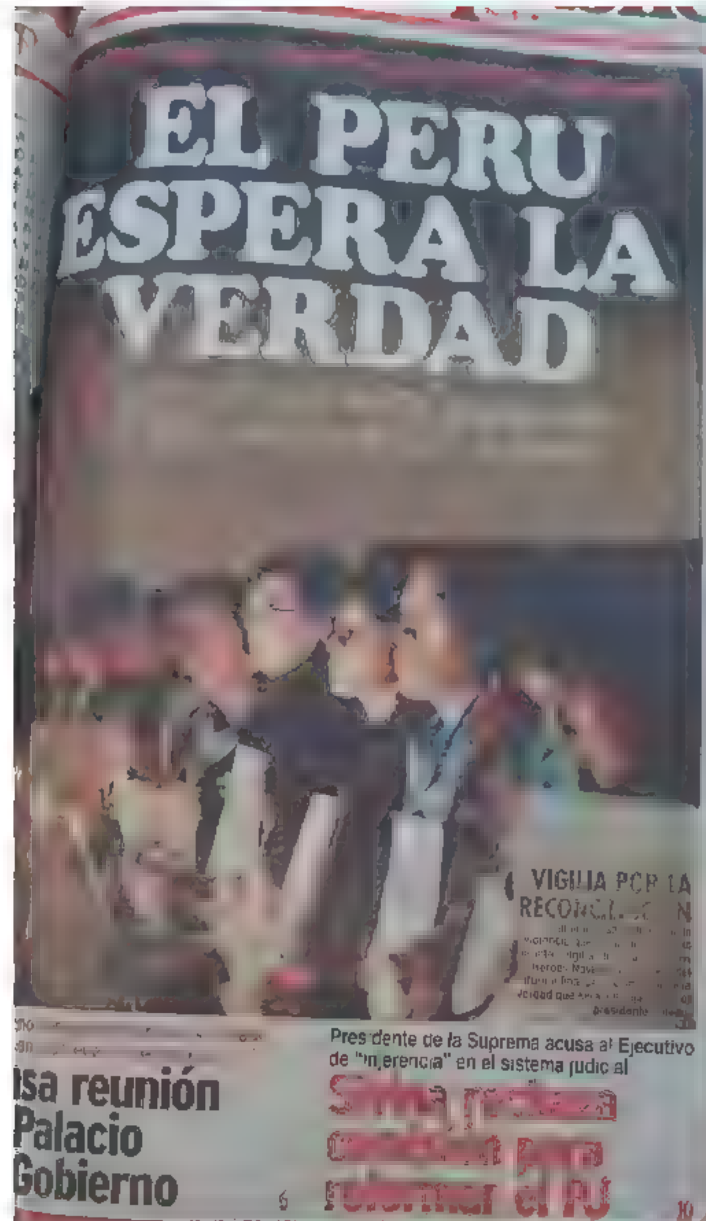


https://www.youtube.com/watch?v=-VlDzeJ2WFs

CVR

# La Comisión de la Verdad y la Reconciliación

- informe sobre el terrorismo vivido en el Perú durante el periodo entre los años 1980 y 2000.
- Creada en junio de 2001 por Valentín Paniagua,
- Presidida por Salomón Lerner Febres
- Recogió el testimonio de 16,985 personas
- Informe publicado el 28 de agosto del 2003






# La Comisión de la Verdad y la Reconciliación







- La CVR en el Perú se planteó la necesidad de historizar el proceso de violencia y sus razones estructurales.
- Dicha historización dio lugar a la **creación de un "nuevo pacto social"** incluido como parte de las recomendaciones del informe final producido por esta comisión
- Llama al compromiso del conjunto de la sociedad para incidir sobre las brechas y fisuras sociales que hicieron posible el proceso de violencia política en el país.

UTEC

# 2 Recorrido virtual LUM

# Actividad 3

## LINEAMIENTOS

La Comisión de Alto Nivel sentó en marzo del año 2012 los cuatro objetivos del LUM

1. *Abordar la historia de [illegible]* iniciado en 1980, a partir de la irrupción del terrorismo, hasta el año 2000. Esto significa dar visibilidad a las causas de la violencia, impulsar la reflexión sobre la importancia del reconocimiento positivo de nuestra diversidad cultural, el respeto y la tolerancia, de cara a superar la exclusión y la intolerancia sistemáticas que posibilitaron que la gran mayoría de las víctimas se concentrara en identidades específicas (quechua-hablantes, campesinos, analfabetos, indígenas y mujeres)

2. *[illegible] de reflexión,* conmemoración e intercambio de nuestra identidad y de nuestra historia. Con esto se busca despertar conciencia sobre el error colectivo, reconocer la crueldad de los grupos terroristas y su ideología, la escasa presencia del Estado en las zonas rurales, la incapacidad del Estado para implementar una política contrasubversiva clara y, en corresponsabilidad con las fuerzas del orden, responder al terrorismo dentro de un marco constitucional y democrático, la indiferencia de gran parte de la población peruana (centralismo limeño) y la frivolidad de los partidos políticos. Con base en una profunda consideración de los sucesos del pasado, el LUM busca ser un espacio de reflexión de la actualidad

3. *Convocar a todos,* especialmente a los jóvenes que no vivieron el periodo de violencia de 1980 a 2000, pero también a las personas y comunidades que fueron víctimas y testigos en ese periodo, y así alentar el compromiso individual y colectivo, habilitando a la ciudadanía para enfrentar con fundamentos el pensamiento totalitario y cualquier acción de violencia, así como sus consecuencias morales, institucionales y materiales. Se busca propiciar el encuentro entre personas con diversas prácticas culturales como un reto y una oportunidad.

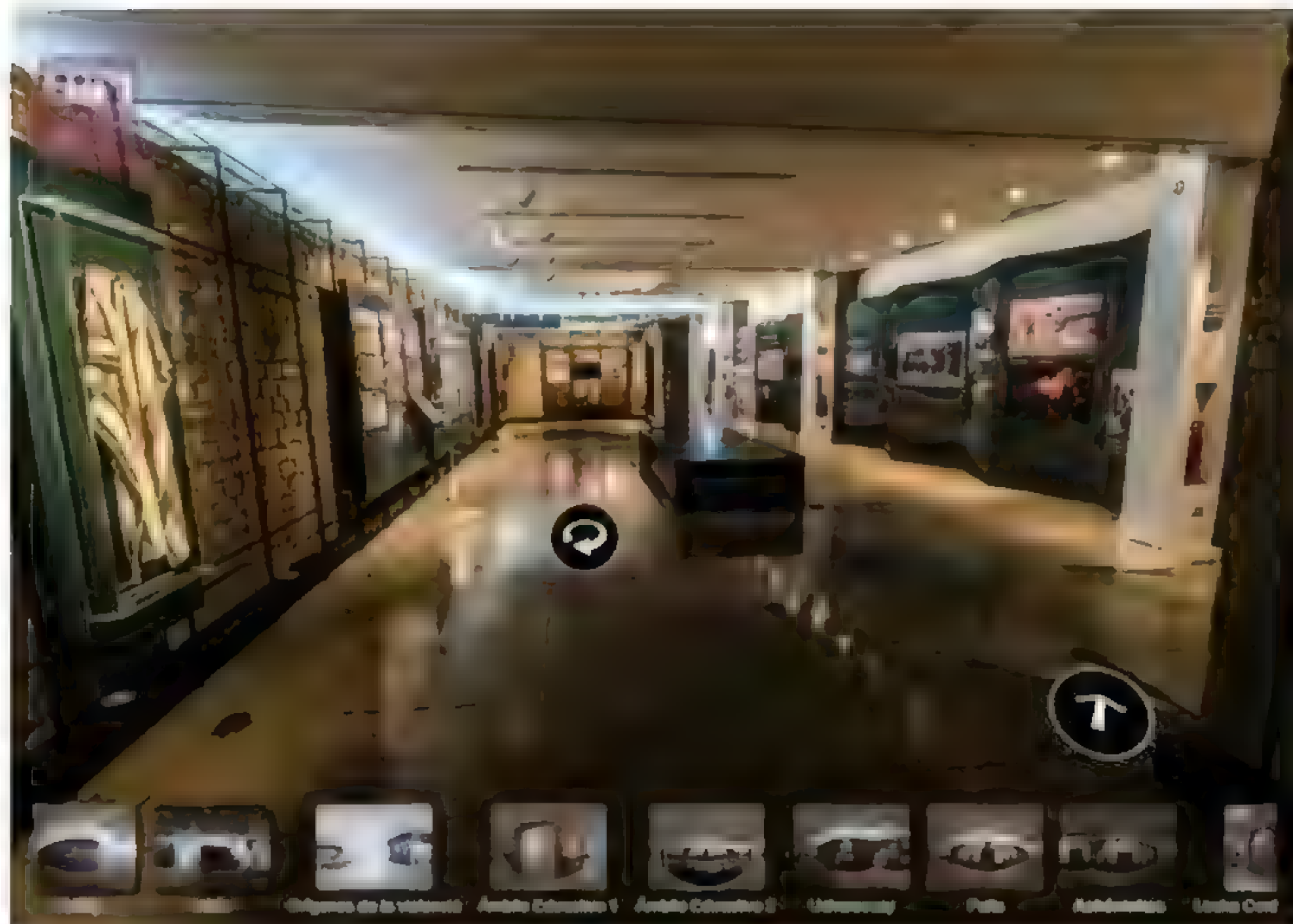
4. *Generar un espacio vivo* para tratar y enfrentar los problemas mencionados y promover la tolerancia, la democracia y el respeto de los derechos humanos ante la persistencia de la discriminación, exclusión e intolerancia en el presente. De esta manera, se busca aportar a la construcción de una nación que asuma como propios los valores de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Concebir el LUM como un espacio vivo implica ser un espacio de diálogo en constante construcción y abierto a críticas, propuestas y sugerencias que enriquezcan su discurso

Grupos: los mismos del trabajo final

PERÚ
1980-2000

DESDE 1980,
EL PERÚ VIVIÓ UNA ÉPOCA
DE EXTREMA VIOLENCIA

**Recorran el LUM en grupos y llenen la ficha disponible en Canvas**



http://www.lum.cultura.pe/visita360

# Bibliografía


- Frisancho, S. (2017). La educación moral para la prevención de la violencia. En: Memorias del presente, p. 38-51. Lima: MINCU, LUM
- Hatun Willakuy (2008). Versión abreviada del informe de la comisión de la verdad y reconciliación. Lima: CVR, Defensoría del Pueblo
- Pease, H. (2014) La política en el Perú del siglo XX. Lima: PUCP
- Elizabeth Salmón (2016) Introducción al Derecho internacional humanitario

# Gracias!



UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA

# La Reforma Agraria

**Perú**

**Temas de la sociedad contemporánea**



UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

# Índice



UTEC





Nombre del docente



# 1 El contexto previo

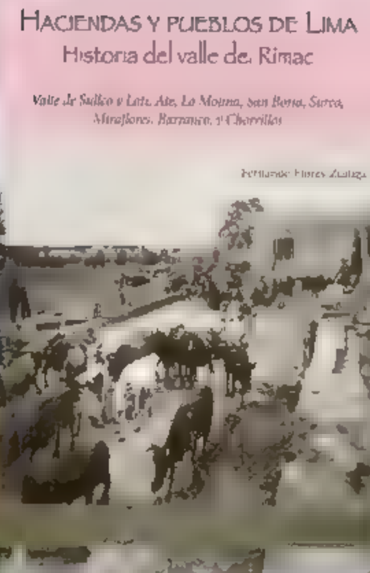
# La economía de haciendas

Hasta 1969, la agricultura en las haciendas era uno de los pilares fundamentales para la economía nacional. Mas aun, determinaban el **funcionamiento y las relaciones entre los sectores de la sociedad** peruana, sobre todo en los espacio rurales.

Las haciendas podían ser tan grandes como una provincia entera y tener varios centenares de familias campesinas en su extensión

En el centro de la hacienda, se encontraba la casa-hacienda, en donde residía el terrateniente. Algunas haciendas tenían mercados y tiendas, en donde los campesinos compraban los productos que producía la hacienda y otros bienes de consumo





# La economía de haciendas



Campesinos en haciendas

Conflicto y consentimiento entre los productores de algodón en el valle de Pisco





Azúcar y trabajo

La transformación de las haciendas en el norte del Perú 1860-1933



BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ



IEP

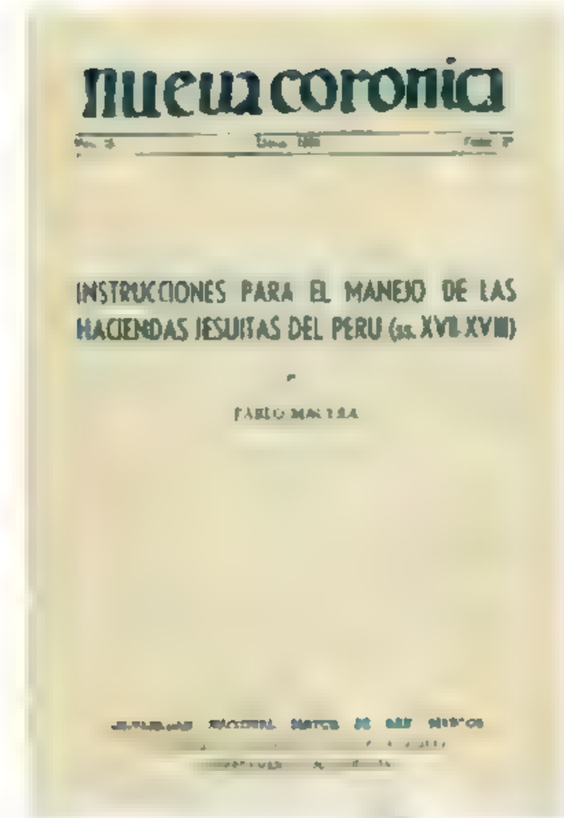
La economía de haciendas y latifundios tenía por base una **relación servil** entre el patrón o terrateniente y el campesino

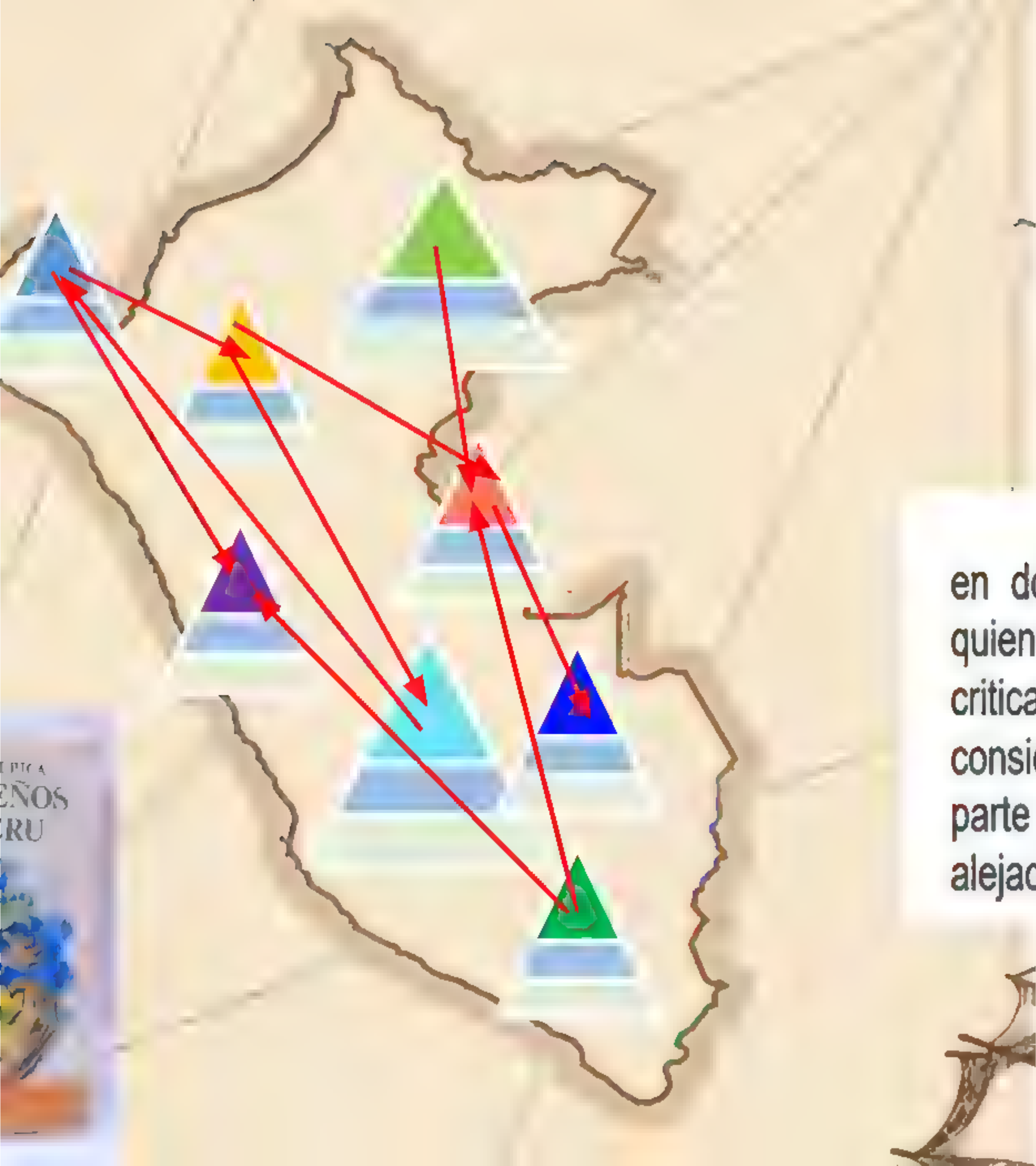
El campesino recibía una porción de tierra para trabajar para sí mismo y a cambio **debía trabajar gratuitamente en grandes extensiones de tierra para el patrón.**

El terrateniente no era solo el **dueño** de la tierra si no también **de las personas dentro de la hacienda.** Así, este decidía acerca de todos los aspectos de la vida de sus campesinos.

Este sistema desciende directamente del sistema colonial del Corregimiento o Encomienda

Esto significó que en muchas haciendas, la vida de las familias campesinas se daba en situaciones de extrema precariedad, sin acceso a salud, educación u oportunidades de crecimiento económico.

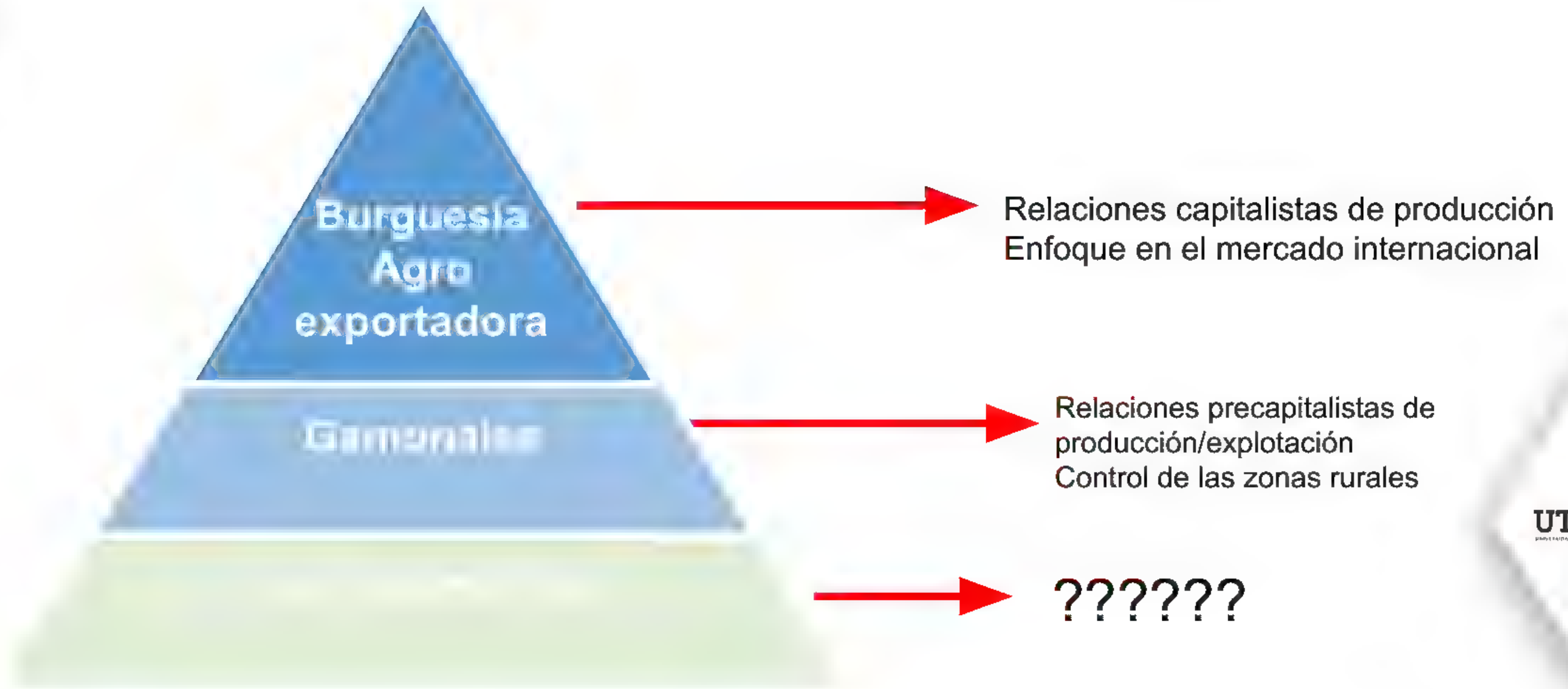




# La economía de haciendas

Tres ediciones de la famosa obra de Malpica se agotaron en dos años. Fue incluso popular entre los propios 'dueños', quienes, según me relatara el autor, le pedían autógrafos o lo criticaban por haber cometido la terrible omisión de no considerarlos en la lista siendo, según insistían, 'vecinos notables', parte cierta, comprobada de las 'grandes familias' de valles alejados.

# La economía de haciendas



# ¿Cómo era la vida en los espacios rurales hasta la primera mitad del siglo XX?






https://www.youtube.com/watch?v=9DjWncuQXMA

# El inicio del cambio

- Hacia 1960 se da una explosión demográfica: la potabilización del agua, mayor acceso a vacunas y reducción de enfermedades infecciosas permiten que la población se duplique en comparación a 1940. La mayor parte, se ubicaba en la sierra.
- Ya desde 1920, bajo Leguía, se venía impulsando la construcción de una Carretera para conectar la capital con el interior del país. Para 1950 ya se tenia un sistema carretero nacional.
- Se origina una fuerte corriente de migración hacia Lima.
- La radio, que llegaba al espacio rural alimentaba las esperanzas ante las nuevas oportunidades de vida en la ciudad.



# El inicio del cambio

- El crecimiento poblacional agudiza el ya precario nivel de vida en las haciendas y latifundios
- El descontento de los grupos campesinos, principalmente en el sur, se refleja con las primeras revueltas y levantamientos
- Se inician movimientos de “recuperación de tierras”






# El inicio del cambio

- La reforma agraria de 1969 es que se trató de la "manera velasquista" de llevarla a cabo, **esta ya se había intentado antes de Velasco.**

- El gobierno de Manuel Prado (1956-1962) creó la **Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda** y elaboró un proyecto de ley que sancionaba un impuesto progresivo a las extensiones de tierra para castigar a las menos productivas. Sin embargo, este proyecto no fue aprobado por el Congreso.

- En 1962, la Junta Militar presidida por Nicolás Lindley implementó la **reforma agraria en la provincia de La Convención**, lo que en la práctica legalizó la distribución de tierras que los sindicatos campesinos venían llevando a cabo.

- En 1964, Belaunde promulga la Ley de Reforma Agraria de 1964 pero esta había sido recortada por la alianza APRA-UNO de tal manera que perdió toda efectividad para variar el *statu quo*.

- Personalidades como el expresidente Manuel Bustamante y Rivero se pronunciaron a favor de la reforma agraria, señalando que era mejor sacrificar un poco de tierra que tener una revolución que trastocara el orden social: ***"tal es el precio del saneamiento de una estructura carcomida y de la paz social" (1955: 35-36).***

- Además, Perú había firmado la Declaración de los Presidentes de América reunidos en Punta del Este (1967), en donde se comprometía a impulsar reformas agrarias como una vía para modernizar las economías de América Latina.

LEY DE REFORMA AGRARIA
reglamentos del texto unico concordado del decreto ley n. 17716 y disposiciones regla mentarias conexas
direccion general de reforma agraria





Fuente: Rolando Rojas. "La reforma agraria y Sendero Luminoso". En Revista Argumentos, Edición N° 4, Año 10, Diciembre 2016. Disponible en https://argumentos-historico.iep.org pe/articulos/reforma-agraria-sendero-luminoso/ ISSN 2076-7722

# El inicio del cambio

- Una última cuestión a tener en cuenta, aunque no menos importante, es el ascenso de los movimientos campesinos y de las "invasiones" de haciendas.

Tres elementos que diferencian a los movimientos campesinos de mediados del siglo XX de anteriores formas de acción colectiva:

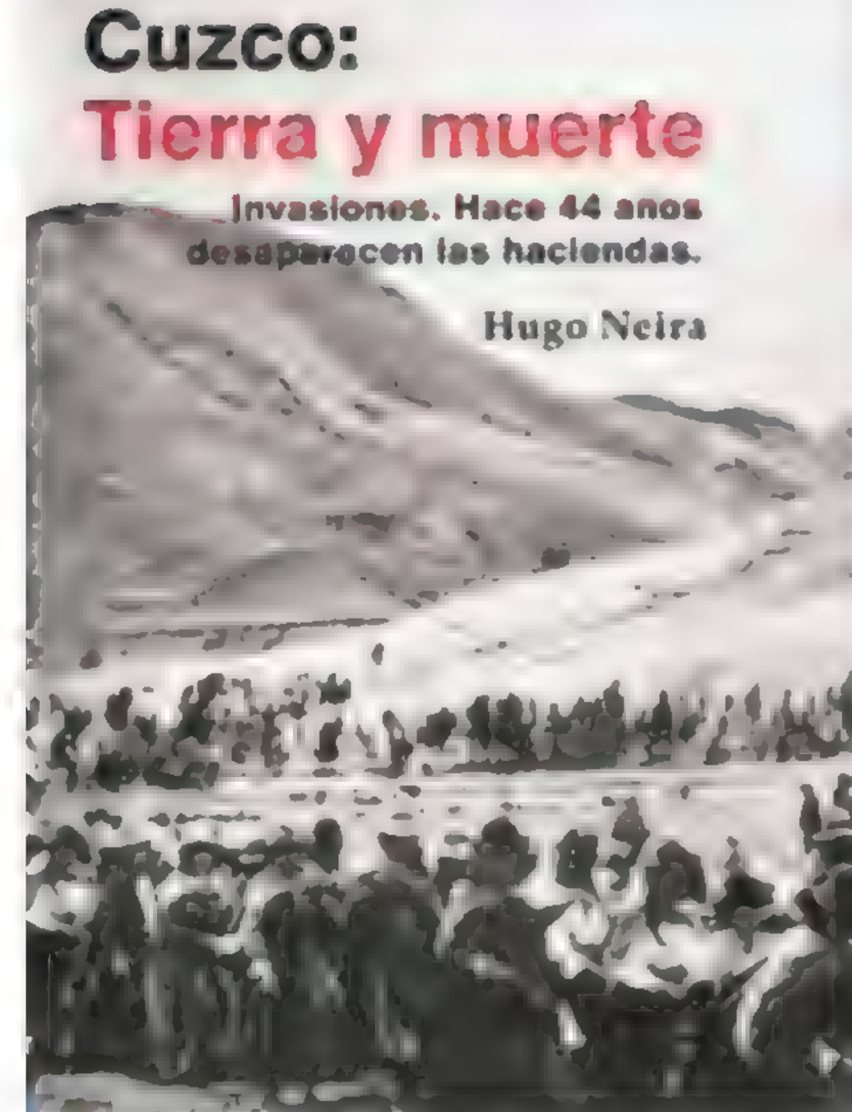
- La creación de sindicatos y poderosas federaciones campesinas, la politización e incluso la militancia de los campesinos en partidos de izquierda, y las huelgas y tomas de tierras como eficientes métodos de lucha (Vargas 1983: 18-22).

- En La Convención y Lares (Cusco) Hugo Blanco mostró las potencialidades sediciosas de la movilización campesina en torno a las tomas de tierras, aunque también la fragmentación y el aislamiento de esa específica región: las "guerrillas campesinas" organizadas por Blanco fueron rápidamente desactivadas luego de la captura de su líder.

- En Cerro de Pasco, Huánuco y Junín las comunidades indígenas estaban a la ofensiva invadiendo tierras que les habían sido despojadas por las sociedades ganaderas.

- La promesa electoral de Belaunde de una reforma agraria alentó estas "recuperaciones" de tierras apenas asumió el poder. En las haciendas de la costa, aunque bajo predominio del APRA, el "proletariado agrícola" contaba con una tradición de organización sindical y movilización política fraguada en las luchas por derechos sociales, incrementos salariales y mejores condiciones de trabajos.

- Así, el escenario rural estaba marcado por el ascenso y protagonismo de los movimientos campesinos y por el repliegue de los terratenientes.




Fuente: Rolando Rojas. "La reforma agraria y Sendero Luminoso". En Revista Argumentos, Edición N° 4, Año 10, Diciembre 2016. Disponible en https //argumentos-historico.iep org.pe/articulos/reforma-agraria-sendero-luminoso/ ISSN 2076-7722

# La radicalización de la reforma




UTEC

https://www.youtube.com/watch?v=BbpcRP13-Og



# ¿Qué cambia?

- Expropiación de tierras a los latifundistas (por bonos, o inversión de bonos en la industria)

- Redistribución de la tierra entre los campesinos que trabajaban en las haciendas

- Creación de cooperativas agrarias de producción social (CAPS) en la costa y de sociedades agrarias de interés social en la sierra (SAIS) que integraban algunas comunidades aledañas

- Cambió las relaciones sociales en el campo, acabando con las relaciones serviles

UTEC

CUADRO 13.2. AVANCE DE LA REFORMA AGRARIA ENTRE 1969 Y 1979

| | Unidades adjudicatarias | Extensiones adjudicadas | | Beneficiarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Hectáreas | % | Número | % |
| Cooperativas | 581 | 2'196.147 | 25,6 | 79.568 | 21,2 |
| Complejos agroindustriales | 12 | 128.566 | 1,5 | 27.783 | 7,4 |
| SAIS | 60 | 2'805.048 | 32,6 | 60.954 | 16,2 |
| Grupos campesinos | 834 | 232.653 | 2,7 | 1375 | 0,4 |
| Comunidades campesinas | 448 | 1'685.382 | 19,6 | 45.561 | 12,1 |
| Campesinos independientes | -- | 662.093 | 7,7 | 42.295 | 11,2 |
| Total | 1946 | 8'599.253 | 100,0 | 375.246 | 100,0 |

Fuente: J. Matos Mar y J. Mejía, *La reforma agraria en el Perú*. Lima: IEP, 1980, p. 182.

# La radicalización de la reforma







https://www.youtube.com/watch?v=syRK4qdgR1Q

# Preguntas antes del video

1. Se dice que la reforma agraria ayudo a democratizar el país ¿por qué?
2. ¿Por que era necesario eliminar a la clase oligárquica para industrializar al país?
3. ¿Era posible construir una sociedad igualitaria en términos sociales y económicos sin la reforma agraria?

UTEC

# Sucedió en el Perú



https://www.youtube.com/watch?v=jBnPcJ4GqlA

19:40 – 30:25

UTEC

# Los retos y limitaciones

- Las aplicación de la reforma fue mucho más lenta de lo esperado, y dejó a muchos campesinos sin una alternativa clara de subsistencia
- La R.A. se aplicó sin estudios que identifiquen haciendas que ya habían pasado por un proceso de modernización y que habían abandonado las relaciones serviles
- No se brindó el apoyo técnico necesario para impulsar a la haciendas administradas por las cooperativas
- La repartición de la tierra generó descontento en el campesinado
- La expropiación de las haciendas tomó demasiado tiempo y no se concretó en todo el territorio nacional

UTEC

# Entonces...

- La reforma agraria no debe ser evaluada únicamente en términos productivos- empresariales.
- Sobre la reforma agraria, hay que distinguir el proceso social y el modelo empresarial y productivo que adopta.
- Como proceso social, la reforma agraria cumple una función democratizadora para el país al convertir siervos en ciudadanos
- Como transformación social y cultural profunda, la R.A. supone el quiebre de una casta social oligárquica y la liberación de los siervos campesinos.




- ¿PORQUE FRACASO LA RA?: https://youtu.be/nfBcPV-1vW0

# El balance

//// RAUL CESAR MARCELO DOROTEO

A fin de cuentas, lo que nos trajo la reforma agraria fue la ampliación del espectro político de la sociedad peruana, donde ahora cabe el campesino como actor político, y muchos líderes campesinos se convirtieron en alcaldes de sus respectivos municipios distritales y provinciales. A la vez, convirtió a los campesinos en pequeños y medianos productores, que hoy luchan "contra las condiciones adversas del mercado, contra la competencia local y extranjera, y con la falta de capital". Pero la reforma no resolvió la pobreza extrema de los pobladores rurales ni ofreció alternativas para hacer frente a la gran explosión demográfica.

Scientia ISSN 1993-422X | Vol. XIX Nº 19



# 2 Quizz

# Gracias



UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA